

Las políticas de seguridad y de prevención en Francia

SOPHIE BODY-GENDROT

Centro de Investigaciones Sociológicas sobre el Derecho y las Instituciones Penales (CESDIP), del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS, Francia)

DOMINIQUE DUPREZ

Centro de Estudios y de Investigación Sociológica de Lille; Instituto Federativo de Investigación sobre Economía y Sociedades Industriales IFRESI (CNRS)

17

En Francia, la prevención de la delincuencia vive su apogeo con la llegada de la izquierda al poder y la construcción de un modelo alternativo, completamente de seguridad, en la década de los ochenta. A partir de 1983, Gilbert Bonnemaison, diputado alcalde de Épinay, movilizó en el seno del Consejo Nacional de Prevención de la Delincuencia (CNPD) a los políticos de todas las tendencias en torno a un tríptico: prevención, represión, solidaridad. Este compromiso del ámbito político existe también en el reparto de competencias entre el Estado y las colectividades locales.

Los años ochenta fueron un período de euforia por la prevención, presentada como el modelo de la prevención social construido de acuerdo con un enfoque etiológico —una política de discriminación positiva a favor de los barrios desfavorecidos— opuesto al modelo angloamericano de prevención situacional, sospechoso de actuar más sobre los resultados que sobre las causas. Ahora bien, desde finales de los años ochenta, estas acciones originales se diluyeron en las políticas urbanas, que dan prioridad a la rehabilitación de las viviendas sociales y el ordenamiento urbano.

El retorno de la derecha al poder en los años noventa, de hecho, es concomitante con los signos de agotamiento del modelo francés de prevención de la delincuencia, lo cual lleva a muchos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, hacia modelos más *seguritarios*. Si bien en los años noventa perduran los dispositivos de prevención —bien o mal— a la sombra de acciones urbanas y de desarrollo económico, la firma de los contratos locales de seguridad (CLS), desde 1997, marca un retorno de la policía nacional como actor principal, bajo la forma de una policía de proximidad, que se arriesga, por razones que explicaremos más adelante, a modernizar la policía de barrio, que se corresponde, en un escenario menos de seguridad, a la prevención situacional.

1. LOS FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN EN FRANCIA

En Francia, la prevención de la delincuencia vive sus primeros desarrollos institucionales en 1972 con el decreto que fija las condiciones de aprobación de los clubes de prevención de las direcciones departamentales de acción sanitaria y social (DDASS). Hay dos variables centrales en la institucionalización de esta estrategia preventiva: la primera contextualiza la intervención en un sector geográfico marcado por un nivel elevado de delincuencia; la segunda indica que el blanco de la intervención es la población joven, delincuente o susceptible de serlo. El resultado de institucionalizar la prevención especializada es doble: la introducción de un método de profesionalización en torno al trabajo de educador especializado, certificado con un título estatal, por una parte, y el control fáctico de las intervenciones, a cargo de los poderes públicos, con el procedimiento de aprobaciones y una tutela administrativa, por la otra.

Los trasplantes de los internados a la calle marca el traslado de una profesión hacia un ámbito de intervención nuevo. Tal vez por esta razón, la connotación de la intervención se asocia a la noción de desventaja, la cual se extiende también en los años setenta a las nociones de inadaptación y de marginación.

V. Pierre y F. Tétard (1985, 127) demuestran que el *lobby* de la educación especializada impide la creación de la profesión de educador de prevención. Después de una experiencia de formación de educadores de prevención en Marly en 1961, surgió una viva oposición entre los educadores especializados y las escuelas de educadores, en nombre de la necesaria unidad de la profesión de educador, y la experiencia no continuó.

Esta extrema profesionalización se traduce en un sistema de valores y de imágenes relativamente unificado, que permite la adopción de un código deontológico basado en la iniciativa privada y que se opone a estrategias de municipalización de la prevención y de control del Estado. El informe de actividades sustituye la evaluación.

La hipótesis central que desarrolla Francine Muel-Dreyfus (1983) en el ámbito de la infancia inadaptaada, parece que la puede retomar el subsector específico de la prevención de la delincuencia. Si la colaboración entre la iniciativa privada, el *terreno* y una profesión —la de educador especializado— se puede llevar a cabo es porque este sector profesional ha permitido «la relación entre sistemas de aspiraciones producidos recientemente y el método de desarrollo de las antiguas instituciones para «desheredados», que tienen una larga historia por detrás. Esta es la razón de tantos cambios de sentido que transforman, por ejemplo, el territorio heredado de la antigua filantropía en un terreno de aventura» (Muel, 1980).

El núcleo duro de los educadores especializados está constituido por miembros de clases medias en situación de fracaso escolar que encuentran aquí la fórmula para redefinir un lugar de trabajo que permita mantener la representación de una profesión en la que uno es su *propio jefe*, las jerarquías son vagas o casi inexistentes, y en la que el agente desarrolla un trabajo importante de representante habitual de los aparatos locales.

Esta conexión entre un tipo muy específico de profesionales de la acción social —los educadores especializados de prevención— y una red asociativa que mantiene muchas de las antiguas protecciones, por una parte, y, por otra, unas tradiciones caritativas, favorece que la iniciativa privada defina de forma autónoma sus necesidades y, por tanto, que mantenga su independencia tanto ante los poderes locales como ante las incitaciones estatales. La profesión de educador especializado es el punto de convergencia de trayectorias sociales diferentes, en las que no es fácil distinguir entre la parte que procede de una *reconversión* debida al fracaso universitario (que implica un cierto desplazamiento) y la parte que procede de una ascensión social real, aunque sea limitada, o la parte que, finalmente, procede de una reorganización, más o menos frustrada, de proyectos de ascensión social.

Tal vez sea conveniente distinguir varias generaciones de educadores especializados, cuyo rasgo distintivo no es tanto la trayectoria social como las modalidades de su reinterpretación. Lo que parece surgir, a principios de los años ochenta, como denominador común, es más bien el recurso a la psicología o el psicoanálisis como discurso para reinterpretar una vivencia demasiado dura, pero también como discurso objetivamente deliberado de la dispersión social que hay en la contratación de profesionales. M. Autès (1977) subraya el peso del *psicologismo* en la formación y la práctica profesional de los educadores; para el trabajo social, el discurso psicológico funciona como productor de ideología.

En este contexto, no es sorprendente que la prevención especializada, a principios de los años ochenta, se viera atrapada en una contradicción: es un sector que atrae bastante, las prácticas son más inventivas y se es más autónomo en los centros para jóvenes de riesgo, cuya organización es a veces arcaica. Pero la prevención es también el sector más anómico: por una parte, recurrir a la psicología dificulta que se tenga en cuenta la realidad a la que se enfrentan los educadores y que se oriente un verdadero proyecto pedagógico; por otra parte, la crítica política a la educación especializada también impide la proposición de una alternativa, lo cual se traduce en los denominados problemas del trabajo en equipo.

Esta historia singular ayuda a comprender la razón por la cual, hasta principios de los años ochenta, los políticos locales se vieron desposeídos de la iniciativa en materia de prevención de la delincuencia.

Otros países tienen experiencias de prevención más o menos similares. Hacia 1975, el gobierno federal de Canadá puso en marcha el programa *Juvenil Diversión Project*. Se trataba de una gran red de experimentación de prácticas de resolución de conflictos. A través de sus programas de prevención, los organismos con vocación comunitaria propusieron a los jóvenes con dificultades de adaptación social unas formas *alternativas* de compromiso. Así, el proyecto *Mini-moto* se articula en torno a actividades de automoción que se ofrecen a «jóvenes que presenten trastornos de comportamiento relacionados con la delincuencia» (Duprez, 1990, 177).

Pero, si bien en el caso de Canadá el objetivo es solucionar los conflictos desde fuera del sistema judicial, en el contexto francés la ideología del no mandato domina siempre la prevención especializada. El educador especializado estima que su intervención no se debe centrar en el individuo, y de entrada su interven-

ción es territorial. Este ámbito siempre se sitúa totalmente fuera de la intervención judicial, incluso en sus dimensiones educativas.¹

Mientras que en otros países los programas son a menudo coyunturales, en Francia la estructuración de la prevención de la delincuencia en torno a la prevención especializada da más utilidad a este sector específico de la acción social. El cambio de las políticas de prevención de la delincuencia, a principios de los años ochenta, está relacionado directamente con este método profesional. Durante los años setenta, el predominio de la educación especializada en este ámbito quedó arrinconado con la intrusión progresiva de los políticos locales en las cuestiones de prevención y seguridad.

La nueva política de prevención, puesta en marcha a principios de los años ochenta, se tiene que ver como una reacción frente a las insuficiencias de la prevención especializada y, más globalmente, frente al trabajo social. Además, es una política que nace en la urgencia que provocan los acontecimientos de Les Minuettes en el verano de 1981, cuando unos jóvenes organizaron carreras de coches robados unas semanas después de la elección del primer presidente de la República de izquierdas, bajo la V República.

2. LAS DINÁMICAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS AÑOS OCHENTA: EL ESTADO ANIMADOR²

El primer dispositivo de prevención aplicado por el gobierno socialista fue el «antiverano caliente», creado en 1982. En primer lugar, llama la atención el carácter de urgencia del dispositivo. En 1982, era preciso evitar que volvieran a pasar los violentos incidentes del año anterior, en las afueras del este de Lyon, y evitar también con medidas de prevención que se propagaran a otras ciudades. Numerosos autores destacan el método del *golpe*.³ F. Dubet (1986, 24) subraya que, en 1982, «la operación parece más bien un “golpe”, ya que lo organizan en quince días pequeños núcleos de profesionales que pertenecen a diferentes ministerios, sobre todo a las DDASS, en las que coinciden los responsables de las administraciones implicadas, los prefectos (gobernadores civiles), las asociaciones y los profesionales y se aprovechan del choque para crear una gran capacidad de innovación. En

1. En Francia, las medidas educativas adoptadas por un magistrado, según se relaciona en la ordenanza de 1945, son aplicadas por profesores de educación vigilada, que hoy se denominan educadores de protección judicial de juventud. A los funcionarios del Ministerio de Justicia se les contrata después del bachillerato, por concurso, y se les forma en una escala específica. También hay una contratación, por promoción interna, en el Ministerio de Justicia, y en este caso no se exige el bachillerato. En una investigación que se llevó a cabo a mediados de los años ochenta, mostramos por qué los educadores de la PJJ son tan diferentes, tanto en sus trayectorias como en su ideología, del universo de la educación vigilada (Duprez, 1981).

2. La expresión es de J. Donzelot, y simboliza el papel del Estado en un contexto de descentralización. Gracias a sus elites y a su capacidad de peritaje, el Estado sólo es un guía de la acción de las colectividades locales.

3. En 1986 se publica una obra colectiva que sintetiza investigaciones de evaluación, las primeras en Francia sobre la acción pública (Dubet *et al.*).

lugar de seguir las reglas habituales de la negociación y de la concertación o de llevar a cabo pesados procedimientos de habilitación financiera, los núcleos de decisión toman iniciativas rápidas y responden a las demandas hechas».

Iniciada por el Ministerio de Asuntos Sociales, esta política adopta desde 1982 un carácter interministerial y asocia los ministerios de Interior, Justicia y Solidaridad Nacional. El dispositivo se prueba en once departamentos. Rápidamente cualificado por los periodistas como *plan antiverano caliente*, es bien acogido, por lo general, por los medios de comunicación e implica otras colaboraciones, como la del ejército o el Club Mediterráneo.

Esta mediatización es el signo de un cambio en la aplicación de las políticas de prevención. El fracaso de la prevención especializada, a finales de los años ochenta, está relacionado con su escaso impacto sobre la opinión pública. Más que a causa de sus fracasos pedagógicos, variables y difícilmente evaluables por los especialistas educadores, el fracaso de las políticas tradicionales de prevención está vinculado a su poca visibilidad.

Los nuevos dispositivos no buscan responder solamente a las debilidades del trabajo social tradicional, sino también al creciente aumento del sentimiento de inseguridad entre los franceses. Conviene demostrar que el Estado no está inactivo en la lucha contra la pequeña y la mediana delincuencia, que promueve las representaciones de seguridad. Es necesario actuar, innovar, experimentar nuevas respuestas, pero también hacerlo saber a la opinión pública a través de los medios de comunicación.

El contexto de las políticas públicas dirigidas a los jóvenes facilita unas tentativas de profesionalización de jóvenes «líderes» en los barrios, a fin de sustituir a los trabajadores sociales, demasiado distantes de las poblaciones con más dificultades. D. Duprez subraya las ambigüedades relativas a la formación de los «animadores procedentes del medio».⁴ Ante las dificultades pedagógicas y las reticencias de los profesionales, el dispositivo nacional de formación de animadores de medio desfavorecido (FMD) se interrumpe a partir de 1985.

En el contexto francés, se ha demostrado que la noción del líder que supuestamente tendría que controlar las bandas en los barrios no es más que un mito. Sin embargo, esta representación supone la aparición de un sistema de aspiración entre los jóvenes de ciudades que despierta, y continúa despertando, las vocaciones. Actualmente, un buen número de sustitutos, monitores de campamentos, empleados por las estructuras tradicionales de la animación y de la acción social o dirigidos —pero no tanto, hoy en día— por asociaciones de jóvenes, salen de los barrios donde ejercen su actividad. En las escuelas de trabajadores sociales, una proporción creciente de educadores y de animadores proviene de la inmigración y de las ciudades. Esta figura se hace presente, sobre todo desde 1998, a través del agente local de mediación social.

4. Cf. Duprez (1986). El Estado francés tiene poca memoria. Nos podemos preguntar si, a finales de los años noventa, la contratación exagerada de mediadores, a menudo procedentes de la inmigración, con empleos para jóvenes (empleos por cinco años como máximo, financiadas por el Estado) no conducirá al mismo estancamiento.

A partir de principios de los ochenta, se cita a menudo el caso de Francia en el extranjero porque pone en funcionamiento unas políticas públicas originales, destinadas a prevenir la delincuencia juvenil. Ciertamente, estas políticas están marcadas parcialmente por el sello de la urgencia, como hemos subrayado a propósito de las operaciones verano-jóvenes, que a veces se califican como planes *antiverano caliente*. El objetivo preferente de este dispositivo, que dirige por lo general el Ministerio de Asuntos Sociales, antes de la ley de descentralización, es más *ocupacional* que preventivo, si entendemos por ello acciones sobre las causas de los comportamientos marginales.

De manera más general, el modelo francés de prevención de los años ochenta entra en la categoría de la prevención social, en la cual los destinatarios de los programas son, sobre todo, los autores potenciales de actos delictivos, pero también los comportamientos inciviles —término que designa el vandalismo, las «malos modales», los comportamientos provocativos—, que no son sancionados por la ley pero que contribuyen a nutrir el sentimiento de inseguridad. En este concepto de prevención, se incluye una acción de animación social y cultural, dirigida a mejorar globalmente las condiciones de vida en un barrio, con la esperanza de actuar indirectamente sobre la delincuencia. Este modelo, por tanto, se aleja de la prevención situacional angloamericana, que busca disuadir a los delincuentes de sus intenciones multiplicando los obstáculos (cámaras, códigos digitales, espacios hiperprotegidos...).

Examinando una muestra de contratos de acción preventiva, hechos entre el Estado y las ciudades, C. Lazerges (1991) sugiere algunos indicios alarmantes: una gran mayoría de acciones poco o nada dirigidas, una articulación a veces floja o sólo formal con los objetivos de prevención. En una evaluación nacional de las operaciones verano-jóvenes, L. Dubouchet (1990) duda entre una política de prevención y una animación vulgarizada. Muchos otros autores subrayan los riesgos de caer en una «generalización excesiva» (Robert, 1991).

En este contexto de interrogantes legítimos sobre la eficacia de las políticas de prevención, algunos actores e investigadores hacen verdaderas acusaciones contra las políticas urbanas. Así, S. Roché (1994) desarrolla un punto de vista particularmente radical: critica un Estado y unos profesionales usurpadores (120), el «fracaso de la sociedad, su incapacidad para imponer normas y que sólo sabe encontrar respuestas técnicas» (138), «la orientación de las políticas públicas hacia los barrios, cuando el territorio sólo constituye un marco de identidad para los marginados, es una opción en rebeldía, porque no entra en la modernidad» (167) y, «según muchos otros autores, el fracaso del modelo republicano de integración» (173).

Nos parece que la falta de evaluación sería de las políticas de prevención, especialmente desde el punto de vista de sus beneficiarios, conduce a propósitos que oscilan con demasiada frecuencia entre unos discursos tranquilizadores (favorecidos por intereses profesionales) y unos discursos inútilmente críticos, procedentes de investigadores que no se enfrentan directamente con la resolución de los problemas de campo.

Lo que sí que aparece en una de las pocas encuestas sobre las políticas urbanas es la escasa visibilidad de la acción pública. Si nos mantenemos en el nivel

estricto de la acción pública local, hecha en el marco de las políticas ciudad-Estado-región del décimo plan, hay que constatar que la población sólo tiene una representación escasa o limitada de esta tema. Por destacar sólo los ejemplos más significativos, poco más del 40 % de los habitantes de Lille-sur conocen las acciones que se han llevado a cabo en el marco de estas políticas, comparado con el 33 % de los habitantes de la gran residencia de Lens o con el 22 % de los habitantes de Liévin. Las acciones relacionadas con la prevención y la disminución de la inseguridad son particularmente poco visibles: el 11 % de los habitantes del sur de Lille consideran que las acciones generan un sentimiento más fuerte de seguridad, frente al 1 % de Lens. La encuesta cualitativa confirma los resultados estadísticos de la encuesta de cuestionario, hecha sobre unas muestras representativas (Duprez, 1996).

El hecho de que las políticas de lucha contra la inseguridad sean poco legibles para los habitantes de los barrios más *sensibles* no significa, sin embargo, que sean inútiles.

Se ha subrayado, y no se debe olvidar, que una de las misiones esenciales de las políticas de prevención es regular los conflictos sociales y evitar los excesos y las manifestaciones de violencia. Todo hace pensar que estas políticas contribuyen a limitar la territorialización de la desafiliación y el paso hacia situaciones a la americana.

Estas intervenciones también ayudan a restituir su razón de ser a los actores sociales, ya que les permiten renovar los vínculos sociales y acceder a una identidad positiva en relación con unos métodos institucionales y políticos que contribuyen a su estigmatización. Es probable, por otra parte, que no captemos el alcance de las transformaciones que se han producido a lo largo de veinte años en la aproximación de profesiones que se encontraban en las antípodas las unas de las otras, como la de educador y la de policía.

3. EL CONTEXTO DE INSEGURIDAD

El vaivén de las políticas de prevención social hacia las políticas de seguridad no se puede entender sin el análisis de la evolución de las actitudes en este ámbito. En el contexto de una sociedad en mutación, las políticas de prevención social, ligadas a la política urbana, intentan resolver las consecuencias de la desafiliación —económica y de relación— de los grupos de población más precarios, en particular los jóvenes de barrios populares, más afectados por el paro y la precariedad que en países como Alemania. Estos últimos veinte años parecen una época de transición, caracterizada tanto por la caída del muro de Berlín y la redefinición de nuevos «enemigos interiores, enemigos infiltrados, enemigos íntimos» (Bigo, 1999; Césari, 1997), como por la aceleración de los flujos de capitales, de comunicaciones, de productos, de poblaciones, de ideas y de culturas, gracias a las nuevas tecnologías.

Estas transformaciones imponen una redefinición de nuestras categorías de análisis: lo global se revela en lo territorial; una proliferación de formas infra o

suprapolíticas y contestatarias induce a interrogarse sobre las mutaciones de las misiones del Estado en cuanto a los ámbitos sobre los cuales ejerce sus prerrogativas y privilegios. Como observa con toda razón Ph. Robert, «el territorio tiene algo que decir sobre las mutaciones en curso; para el sociólogo de la marginación, arriesgarse a tener en cuenta unos territorios tiene, de entrada, el mérito de informarnos sobre posibles mutaciones del lugar y del papel del Estado en el control social» (2000).

La ciudad es el emblema de las ansiedades suscitadas por estas transformaciones, tanto políticas como económicas o socioespaciales; espacio geográfico y hecho social a un tiempo, la ciudad suscita debates en torno a la violencia de los barrios, construidos con el vocablo más visible, más común y más familiar de *seguridad* y, en cambio, oculta cuestiones políticamente incontrolables, por ejemplo las demandas de atención y de igualación, así como de protecciones siempre crecientes en términos de trabajo, movilidad, salud, educación, bienestar, riesgos. Las preocupaciones de los alcaldes y de los ciudadanos expresan su inquietud respecto a ciertos grupos y a ciertos lugares de una ciudad menos sociable, en comparación con un pasado idealizado, pero sólo se tienen en cuenta en el debate público, a través de los medios de comunicación, a principios de los años noventa, a causa del aumento de las cifras de la delincuencia de menores.⁵ Antes de este período, las elites de izquierdas tienen dificultades para hallar su posición, tanto en el discurso como en las medidas de la política de orden urbano.

Cuanto más grande es una ciudad, más agudos son estos problemas, así como la diversidad de los recursos empleados en la resolución de los conflictos. Tres factores —coyuntura demográfica, salud económica y elección política— pesan sobre el Estado de las relaciones sociales y la fluctuación de la pequeña y la mediana delincuencia. El segundo de ellos es importante, pero no determinante; es la conjunción de factores múltiples lo que se debe considerar en el análisis, de aquí su complejidad. Ciertamente, no se puede negar la incidencia del mercado, que acelera la polarización y la segregación espacial de las poblaciones, y también recompone los espacios en función de las propias finalidades, creando dislocaciones y desplazamientos. Pero, al mismo tiempo, las ciudades y los barrios tienen archivos de destreza histórica y cultural, riquezas y tradiciones de movilización cívica que se oponen a las fuerzas de disgregación. Política y cultura forman la sociedad civil y su eficacia. Así pues, hay diferencias históricas en las maneras de hacer de países y de ciudades (Body-Gendrot, 1998).

Desde un punto de vista comparativo, el sentimiento de inseguridad —del cual se quejan los ciudadanos de las grandes ciudades francesas— se basa menos objetivamente en los delitos observados que en otras metrópolis de otros países de África, de América Latina, de Asia o de Norteamérica. Las fragmentaciones terri-

5. Sería inútil negar el aumento tendencial de la delincuencia de los menores en los años noventa. Pero, como subraya L. Mucchielli (2000), las alzas principales hacen referencia a una categoría de infracciones, cuyo descubrimiento y represión proceden directamente de los enfrentamientos cotidianos entre los jóvenes y la policía. El consumo de drogas explica una parte sustancial de los incrementos.

toriales, sociales y raciales que segmentan las periferias y los centros de las ciudades son menos extremas, cuantitativa y cualitativamente, y las poblaciones de viviendas sociales francesas no son guetos americanos, aislados por el color de la piel y por la pobreza extrema de la población, sin servicios públicos adecuados (Brun *et al.*, 1994; Body-Gendrot, 1999; Waccuandot, 1999). Hay menos armas mortales en las calles y en las ciudades, y la mayoría de los jóvenes urbanos no imaginan su futuro en una cárcel. Lo admitamos o no, el proceso de asimilación cultural y socioeconómica atenúa las diferencias de origen y produce una sociedad más consensual, no sólo en cuanto a su proyecto sino también respecto a sus diferencias, aunque el 75 % de los franceses es consciente de las discriminaciones que se ejercen contra los grupos procedentes de la inmigración (Simon, 1999), discriminaciones que pueden engendrar frustraciones violentas. En materia de seguridad, no se acepta la autodefensa. La imagen de los funcionarios y de los alcaldes es positiva para el conjunto de la población. La intervención del Estado en los procesos sociales no se critica. Una gran parte de la sociedad francesa continúa pensando que cuanto más joven es el delincuente, más posibilidades tiene de integrarse de nuevo en la sociedad, perspectiva que se ha abandonado, en parte, en los Estados Unidos, donde 45 estados han modificado su legislación para poder juzgar a los menores de más de catorce años en los tribunales de adultos.

Hoy, los circuitos de información, ampliamente difundidos, permiten saber cómo viven los otros en el espacio nacional, incluso en las otras ciudades. Además, algunos de los habitantes de las ciudades relegadas perciben su importante sentimiento de inseguridad como una injusticia. A ello se añade la estigmatización territorial, el sentimiento de una ausencia de oportunidades de movilidad, comúnmente compartida; a partir de aquí, cualquier tipo de conducta es posible. Algunos se repliegan hacia la esfera privada; otros quieren destacar mediante el consumo ostentador de marcas, otros —o los mismos— mediante comportamientos violentos, cuya función es «estabilizar y controlar un entorno en mutación, provocar lo que es previsible» en lo que D. Lapeyronnie denomina un *contramundo* (1999). Paralelamente, la separación colectiva de los habitantes dificulta el análisis del fenómeno; la identificación con el conjunto residencial en el que se crece puede ser paralela al rechazo de los habitantes de ciertos edificios o de ciertas asociaciones de una misma población (Body-Gendrot, De Rudder, 1998). La proximidad espacial de familias con orígenes y trayectorias divergentes puede exacerbar las diferencias y dificultar la convivencia en un mismo espacio residencial (Chamboredon, Lemaire, 1970).

Los sondeos sólo tienen un valor indicativo; son una fotografía instantánea que no puede servir como prueba, y se deben confrontar con las encuestas de victimización. Sin embargo, sí pueden considerarse como un indicador, al menos en el ámbito del contexto mediático. En noviembre de 1998, el miedo a los *desórdenes urbanos* se situaba en el segundo lugar de las preocupaciones de los franceses. Las tres cuartas partes de los encuestados dicen que esta situación es extremadamente o muy preocupante. Los alcaldes de las grandes ciudades colocan la seguridad pública en el segundo lugar de sus prioridades, inmediatamente después del paro. A partir del año 2001, la economía mejora y la seguridad pasa a

ocupar el primer lugar de las preocupaciones de la opinión pública en los sondeos. Varios hechos provocan este cambio de opinión: las cifras de la delincuencia juvenil, en un aumento del 50 % después de 1990 (es decir, el 21 % del conjunto de la delincuencia, en 1998), y los sucesos que aparecen en la primera página de los medios de comunicación. El uso de las cifras de la policía es una postura institucional básica. Ahora bien, hace que B. Aubusson de Cavarlay señale que la proporción de jóvenes en la delincuencia global, en 1996, es casi la misma que en el año 1980. Las denuncias de las víctimas, más frecuentes, y las prácticas institucionales, más rigurosas, son las responsables del aumento estadístico (Aubusson de Cavarlay, en Lazerges, Balduyck, 1998, 263-291). Para L. Mucchielli, el aumento de los actos violentos urbanos atestigua tanto la degradación de las relaciones entre jóvenes y policía como el crecimiento de la destrucción y la degradación de los bienes públicos. En efecto, a partir de 1991, el nivel de la medida que pone en funcionamiento la sección Ciudades y Afueras de los servicios secretos de la policía francesa «sobrerrepresenta» los insultos y los ataques contra los agentes de las fuerzas públicas.⁶

¿No serán estos actos violentos un pretexto para la manipulación institucional y mediática hecha por pseudoexpertos?⁷ ¿No serán estos discursos una presentación ideológica independiente de la evolución de la delincuencia en las ciudades? El contexto de las interpretaciones sociológicas de finales de los años noventa recuerda el de finales de los setenta, en un momento en que el sentimiento de inseguridad se analizaba independientemente de la inseguridad real.⁸

A partir de una encuesta de campo hecha en la ciudad y en las afueras de Lille (Duprez, 1996), se manifiestan varios tipos de desórdenes urbanos, causados por los jóvenes de las ciudades. Los incendios de coches (que se producen, en general, entre mayo y junio) son claramente la manera que tienen ciertos grupos de jóvenes de negociar directamente con los políticos sus vacaciones. Si bien en este caso se puede hablar de la instrumentalización de los incendios, en otros casos se trata de un ritual, ya que no hay un objetivo de negociación sino, simplemente, una puesta en escena.

No podemos clasificar estos desórdenes urbanos como *violencia*, ya que, como subraya muy justamente Ph. Milburn (2000), la noción de «violencia actúa como una sinécdoque de las ilegalidades, en particular de las que provocan los jóvenes, y de la inseguridad. Este efecto de sinécdoque, figura retórica que utiliza la parte para designar el todo (Becker, 1997), reduce un conjunto de comportamientos a una noción muy imprecisa sobre el plano empírico».

Aunque es inútil negar que ciertos grupos de jóvenes de las ciudades recurren a la degradación de bienes, se puede constatar que, contrariamente al objetivo de unos campesinos o pescadores manifestantes que saquean el Ministerio de Equi-

6. Vid. el número 4/2001 de la revista *Déviance et Société*, dedicado a la sociología de los desórdenes urbanos.

7. Este es el tono de todos los artículos de *Le Monde diplomatique* de febrero de 2001, en particular el de F. Rimbart.

8. En la literatura de la época, especialmente Coing y Meunier (1980), y Ackermann *et al.* (1983).

pamientos de París o el Parlamento de Bretaña, u otras instituciones relacionadas con el mundo laboral, los medios de comunicación y los actores políticos no atribuirían sentido político a las acciones de los *jóvenes vándalos*, negarían su potencial para entrar en el juego de los actores y su capacidad de ofrecer unos modos de expresión alternativos. ¿Influye en esta falta de reconocimiento el hecho de que los protagonistas sean, con frecuencia, de origen extranjero? Podríamos pensar que es así. A. Collovald, al final de un análisis sobre la cobertura de los desórdenes urbanos en Francia, destaca la exterioridad sociocultural de los periodistas, lo cual hace que sus contactos con los grupos de jóvenes sean improbables y propicios a todo tipo de incomprensiones. «Estigmatización explícita o implícita: sus actitudes o sus comportamientos siempre se descifran en términos de carencias, de fracasos, de defectos» (Collovald, 1999, 48). La extrema fluidez de las identidades y de las situaciones, verdaderamente, dificulta el análisis. A ello se suma el hecho de que la violencia invisible —consumo de droga, muerte por sobredosis, suicidio—, relacionada con la economía sumergida, es tan preocupante como la violencia visible en los campos de deporte, en los institutos o en los enfrentamientos con los agentes del Estado. Simplemente, se habla menos de ella (Body-Gendrot, 2001).

4. LAS POLÍTICAS URBANAS, APLAZADAS

En 1993, con el retorno de la derecha al mando del Estado, las políticas preventivas se llevan a cabo con menos entusiasmo, dentro del marco de las políticas urbanas. La Delegation Interministérielle à la Ville (DIV) ya no está bajo la autoridad del primer ministro, sino de los Asuntos Sociales. Los diferentes ministerios se ven enfrentados por métodos concurrentes en cuanto a las fuentes de financiación. El Ministerio de Finanzas intenta reducir las iniciativas desplegadas en más de ochocientos barrios «sensibles». Para unos, la descentralización ha ido demasiado lejos, mientras que para los otros, hay que dejar más flexibilidad a los alcaldes. La política, en un enfoque centrista, pretende satisfacer el mayor número posible de electores potenciales. En 1993, se asigna un presupuesto de nueve mil millones de francos a los proyectos urbanos, para cinco años.

En la base de la política territorial de prevención, los contratos de ciudad combaten los problemas socioeconómicos específicos de trece barrios piloto (número que se revisa al alza) a través de las sociedades de cooperación interadministrativa, creadas para lograr una mayor coherencia entre los servicios y el terreno local. La política urbana ya no se centra en los barrios problemáticos, sino que se dirige al conjunto urbano en el cual están situados (contratos de ciudad, firmados a partir de 1993). Esta es la ambición, pero no la realidad. Se puede considerar, una vez más, como un golpe de efecto, más que como una reforma de las políticas de orden en las ciudades (Duprez, 1997, 70).

A partir de 1994, se dibuja una nueva política en tres ámbitos. En primer lugar, una política de zonas francas, calcada de las experiencias angloamericanas, añade un componente económico a las políticas sociales territoriales (Body-Gendrot, 1996). Varios analistas habían subrayado que la ausencia de acción sobre la

economía en los barrios era el punto débil de una verdadera prevención social de la delincuencia (Duprez, Hedli, 1992). Un cierto número de alcaldes ponen en duda esta política por motivos ideológicos y, después de los primeros balances, por su coste, desde el punto de vista de los servicios fiscales. Pero se olvidan los casos, como el de Roubaix, en que las zonas francas contribuyen a detener la espiral infernal de las fugas de actividades económicas. A continuación, se crean unos empleos urbanos, destinados a los jóvenes de las ciudades, un nuevo ejemplo de acción preferencial territorial. Finalmente, los representantes del Estado y los barrios sensibles firman unos contratos (Donzelot, Estèbe, 1999, 55). En el éxito y el fracaso de estas gestiones hay que tener en cuenta el factor humano, en particular entre los responsables encargados de negociar, de establecer unas prioridades de financiación y de convencer a los colaboradores para que se impliquen en un mismo objetivo.

A diferencia de los enfoques angloamericanos, en los que se hace competir a las ciudades, la Administración, y después el Estado, selecciona los barrios sensibles y los colaboradores locales negocian (Tabard, 1993). En efecto, la encuesta INSEE, de 1995, sobre los barrios que tienen políticas urbanas, muestra una gran diversidad de barrios, algunos más cercanos a la media de las zonas urbanas que a la de los barrios verdaderamente en dificultades (VV.AA., 1997). No hay que olvidar la influencia política de algunos alcaldes para obtener créditos para barrios que no son tan *sensibles* como indica su clasificación en la taxonomía administrativa. En la mayoría de los casos, los procesos de negociación son muy difíciles, debido a la complejidad de las redes de poder y de influencia. Para evitar las críticas, los responsables distribuyen los fondos entre todos los municipios, cualquiera que sea la gravedad de sus dificultades. Los verdaderos cambios sólo se producen como respuesta a los desórdenes o disturbios.

Paradójicamente, el retorno de la izquierda al poder en 1997 no supuso una reactivación de la política urbana. Incluso se pudo leer en un importante diario de la tarde que el delegado general de la DIV se veía al mando de un barco, con las luces apagadas, y entre la niebla. Pero ¿podía la izquierda abandonar a sus militantes implicados en la política de prevención en los barrios? Con los años, la política de la ciudad había abierto mercados públicos y había creado numerosos puestos de trabajo, incluidos los de los jóvenes procedentes de la inmigración, neoproletariado urbano encargado del control social. ¿Se pueden suprimir estos puestos de trabajo, cuando el objetivo es disminuir el paro? ¿Se tienen que municipalizar y perder así la mediación que ejercen entre la esfera local y el poder central?

Durante la primavera de 1998 se creó un tercer tipo de política (fuerte en retórica y en gestos simbólicos y débil en presupuesto), con una reorientación de los consejos locales de prevención sobre la seguridad.

5. UNA RETÓRICA SOBRE LA REACTIVACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN

Ciertamente, la política de prevención continúa con los grandes proyectos urbanos y los grandes proyectos de ciudad, con la pretensión de articular la rees-

tructuración urbana, la revitalización económica y el proyecto social, pero haciendo más hincapié en la seguridad (*vid. infra*). Después del coloquio de Montpellier, *Agir au quotidien dans les villes*, en marzo de 1999, los Consejos municipales de prevención de la delincuencia (CCPD) se transforman en CCPS (Consejos municipales de prevención y seguridad). Se obtienen nuevas financiaciones para el período 2000-2006 y se ponen en marcha cincuenta grandes proyectos urbanos, centrados en la reestructuración de las viviendas y equipamientos. Se está a punto de firmar nuevos contratos urbanos. Se prevé reforzar los servicios públicos en los barrios con dificultades.

¿Qué balance se puede extraer de veinte años de políticas de prevención social? Nadie puede contabilizar los actos violentos que se han podido evitar, afirma, con razón, J.M. Delarue, antiguo delegado de la DIV. Sin esta política de prevención, ¿habrían ido peor las cosas, en términos de exclusión y desamparo? El problema de las políticas públicas francesas proviene del hecho de que no se evalúan demasiado y que, en lugar de ponerles fin e intentar otro enfoque, perduran a pesar de sus fracasos (política de hojaldre, evocada en 1991 por J. M. Delarue). A pesar de las intenciones de modernización del Estado, no se impone ni el método global ni el transversal y la competencia entre los ministerios y los servicios no desaparece, aún hoy. Esta colaboración no se basa en una dinámica de confianza. No podemos subestimar los conflictos de ideología, de objetivos y de intereses ni las dinámicas negativas entre sus partes constitutivas. El método de gestión, efectivamente, institucionaliza la desconfianza y los rituales de verificación descritos por A. Crawford (en este mismo volumen). Con algunas excepciones, para los servicios de policía y de justicia siempre es muy difícil colaborar con los trabajadores sociales y los educadores en casos específicos. Además, los servicios descentralizados y los alcaldes se esfuerzan por conseguir subvenciones de los ministerios, más que para aplicar la prevención en barrios marginales —los cuales, además, votan poco—, para financiar las operaciones en curso.

La delimitación de las zonas de política urbana se hace a partir de los mapas de la Administración, y no a partir de los problemas de delincuencia. En un informe de ochocientas páginas, publicado en 1998, el antiguo ministro J.P. Sueur, asesorado por un equipo de expertos, describe la estrategia que se tendría que seguir para resolver los problemas de los barrios. Bajo el título de *Demain la Ville*, el informe preconiza unas relaciones contractuales entre el Estado y las zonas metropolitanas basadas en un principio de solidaridad y de responsabilidades compartidas. Insiste en el carácter mixto de la sociedad, en la calidad de los servicios públicos y en la igualación de estos barrios a través de unos impuestos para poder financiar los programas de los contratos en materia de transportes, de rehabilitación de edificios y de ordenamiento urbano (Sueur, 1998, 4). Pero la intercomunidad, las comunidades de municipios, los gobiernos de poblaciones que quieren preservar unos intereses urbanos inquietan, en particular, a los políticos rurales sobrerrepresentados en el Senado. Numerosos países tropiezan con obstáculos similares y la invocación de un plan Marshall para las afueras, del candidato J. Chirac, en 1995, no ha sido más que retórica electoral.

Podemos decir todavía que estas políticas se conciben en los estratos más altos del Estado. G. Chevalier (1996, 224) defiende que «más que el nacimiento de un “Estado animador”, la política urbana ha supuesto una reorientación autoritaria del modo de acción a iniciativa del Estado, para intentar controlar los efectos de la descentralización». A diferencia de los países vecinos, en estos proyectos no se tienen en cuenta ni las aportaciones del sector privado, ni el punto de vista de los habitantes, ni los controles democráticos mutuos (Body-Gendrot, 2001). Estas políticas son obra de expertos cuya posición en los organigramas de la función pública territorial a menudo es frágil.

6. LAS OFERTAS DE LA SEGURIDAD

Cuando llega al poder la izquierda en 1981 y G. Bonnemaïson se encarga de reflexionar sobre la delincuencia de los menores y los problemas de división social en los barrios, la página no está totalmente en blanco. En 1977, la comisión Peyrefitte sobre la seguridad identificaba claramente las estrategias que se debían poner en funcionamiento para restablecer el orden público, y un gran número de estas propuestas las retoman los alcaldes que rodeaban a G. Bonnemaïson. Sin embargo, la comisión Bonnemaïson quiere desmarcarse de las propuestas relativas a la *seguridad* pública, considerada como un ámbito reservado a la derecha. Deja a un lado las peticiones de firmeza y de retorno al orden y preconiza una estrategia pragmática de tratamiento de la delincuencia. Busca los instrumentos locales e implica a los alcaldes. Por ello, los instrumentos que son privativos del Estado —la policía, estatal desde 1941, y la justicia—, en primer lugar, sólo serán presencias simbólicas en los grupos de colaboración que se ponen funcionamiento dentro de las políticas de prevención, aunque en las reuniones los comisarios centrales de la policía presumen de su experiencia, basada en las estadísticas delictivas.

«En 1982... se habían ido proscribiendo toda una serie de términos, por considerarlos inapropiados, del vocabulario de las personas que querían tener un enfoque positivo, o supuestamente positivo, de los problemas de inseguridad. El resultado era que sólo aquellos que tenían una visión negativa del tema utilizaban algunos términos, reforzando, evidentemente, su negatividad, como sanción, preso, violencia, delincuencia... testigo o educación cívica» (Bonnemaïson, citado por Dourlens, Vidal-Naquet, 1994, 13).

El propio título del informe de los alcaldes sobre la seguridad de 1982 fue ampliamente discutido y cuando se admitió que debía figurar la palabra represión, se insertó entre el de prevención y el de solidaridad. «El papel esencial del aparato represivo es... mantener el consenso nacional sobre una serie de valores en los que se basa la vida común, confirmar la solidaridad nacional», se podía leer en el informe. La mayoría de las propuestas se referían a la prevención e ignoraban la sanción. La represión no era uno de los temas de debate nacional o local (Dourlens, Vidal-Naquet, 1994, 13).

A pesar de la evolución de los alcaldes de izquierdas en esta época hacia una concepción menos idealista de las respuestas a la delincuencia y una cierta forma

de pragmatismo, para numerosos militantes de izquierdas, la policía siempre es percibida como «un mal necesario, oscuro e inquietante» (Monjardet, 1996). El informe de los alcaldes afirma que «la policía debe estar bajo la responsabilidad del Estado en lo que se refiere al orden público y bajo el control de la justicia cuando ejerce misiones judiciales... Hay que encontrar la manera de resolver este conflicto de métodos (entre la policía y el ayuntamiento), sin que el alcalde se convierta en jefe ni comisario de policía, el responsable de la prevención...». Si tiene que haber represión, no puede ser entre los pequeños y medianos delincuentes, pues de ellos ya se ocupan las medidas de prevención, sino en «el verdadero bandidaje y las reincidencias recalcitrantes, a los que hay que aplicar una represión ajustada» (Dourlens, Vidal-Naquet, 1994, 15-16).

Ahora bien, durante este período, las cifras de la delincuencia registradas por la policía no dejan de aumentar, pero, como sugiere D. Monjardet, la policía, basada sólo en el mantenimiento del orden y la lucha contra el bandidaje, y *obligada al mutismo*, parecerá haber perdido el conocimiento de la calle y sus antiguos saberes. Es notorio también que el hermetismo mental de las elites francesas les impide fijarse en la evolución de la delincuencia en otros países y en las estrategias que estos despliegan para circunscribirla.

Durante estos años marcados por los desórdenes en la periferia urbana y por el aumento potencial de las víctimas, el sentimiento de inseguridad respeta poco las categorías sociales. En las representaciones, la eficacia de la policía, de la justicia y del sistema penitenciario, cada vez más costoso, se cuestiona claramente. Enfrentada a los macrocambios sociales y culturales del país, la jerarquía policial parece que resiste a la necesidad de reformar sus estructuras y sus métodos de intervención. En parte, este dilema surge porque el gobierno se muestra incapaz de resolver el desacuerdo que se produce en el seno de la policía del Estado entre los defensores del mantenimiento del orden (con intervenciones dirigidas) y los defensores de la seguridad pública (destinada a tranquilizar a la población) —destaca P. Cardo, alcalde de Chanteloup-les-Vignes (municipio marginal de la región parisina) y autor de un informe sobre la violencia urbana (1991). El mantenimiento del orden, ha sido con frecuencia la primera prioridad, herencia de los gloriosos treinta, cuando la seguridad de los franceses no constituía un problema. También se ha descuidado el tratamiento de la pequeña y la mediana delincuencia y de los desórdenes urbanos. Por otra parte, lo que D. Monjardet denomina la deflagración de 1968 y la amenaza de la izquierda acaparan la atención de la jerarquía policial hasta mediados de los años setenta.

El sentido común y, principalmente, las clases medias, interpretan la creciente percepción de la inseguridad en las ciudades como una crisis de la autoridad del Estado y una ausencia de perspectiva. «La fuente de controversia entre Francia y su policía proviene de la diferencia percibida entre lo que la policía tendría que hacer y lo que hace. Este sentimiento varía, según las categorías de usuarios o de observadores, pero lo comparte el conjunto de la población», escribe J.M. Belorgey, en un informe sobre la reforma de la policía que ha recibido críticas (1991; 2000). El sentimiento de que la policía no se preocupa del deterioro de la calidad de vida cotidiana ni del crecimiento de la delincuencia caracteriza los años marcados por las políticas de prevención.

Mientras que, según el informe Peyrefitte de 1977, en el año 1976 hubo el doble de delitos que en el año 1967, cinco veces más robos violentos a mano armada y veinte veces más atracos (1977, 31), el número de delitos contra los bienes se sigue duplicando en los años ochenta, según las cifras oficiales, mientras que los atentados contra las personas siguen estables. El sentimiento de inseguridad es evidentemente subjetivo. Ciertamente, menos del 5 % de los franceses han sido víctimas de una agresión seria, según el modelo introducido por el INSEE en 1996 en la encuesta sobre las condiciones de vida de las familias. Por el contrario, los delitos son entre cuatro y cinco veces más altos que lo que revelan las estadísticas oficiales, según una encuesta del IHESI hecha en 1999. Se resuelven menos del 15 % de los robos (es decir, dos tercios de las denuncias) y menos del 10 % de las violaciones (Robert *et al.*, 1990, 69). El 80 % de los casos se archivan, en parte, por la falta de identificación de los autores. Desanimadas y mal recibidas en las comisarías, muchas víctimas no denuncian y cuando lo hacen con frecuencia es a petición de las aseguradoras. El ejemplo siguiente muestra los efectos nocivos de esta situación. Un procurador provincial, sobrecargado de trabajo, decide, un buen día, archivar sin consecuencias los casos de robos cometidos por menores en un supermercado local. Por tanto, el comisario de policía deja de registrar las denuncias del director del supermercado. Los robos de los jóvenes se intensifican. Exasperado, el director contrata un nuevo equipo de seguridad privada. Entonces se producen violentas confrontaciones entre los vigilantes y los jóvenes, y los políticos se ven obligados a intervenir para poner fin a los disturbios, después de que cuatro jóvenes fueran arrestados.

Aunque la policía disfruta por lo general de una imagen positiva (las personas están convencidas de que es necesaria), las opiniones negativas aumentan cuando se evalúa la eficacia de su trabajo (Zauberman, Robert, 1995, 63-64, 71).

La «cultura» de la prevención social, muy arraigada en Francia, revela una dificultad: la de separar aquello que depende de la responsabilidad del Estado y aquello que depende de otros actores. La política urbana intenta reconstruir el tejido sociourbano, promover una participación más amplia, mantener una policía de proximidad y dar más autonomía a los actores de campo. Además, aunque no se ha establecido ningún vínculo convincente entre el vandalismo institucional, los desórdenes en las *añueras* y el aumento del sentimiento de inseguridad, se supone que este sentimiento desaparecerá cuando el *vínculo social* (la otra expresión preferida para referirse a la confianza compartida) se consolida. En consecuencia, el pragmatismo inicial de la prevención social parece sobredeterminado por una especie de doctrina, casi una cultura, basada en la repulsión hacia la represión, incluso renovada (Dourlens, Vidal-Naquet, 1994, 17).

A partir de 1986, la mayoría de los CCPD opta por unas actitudes minimalistas, más que por un debate sobre los métodos de la policía y de la justicia en los municipios (Estèbe, 1990). Hay que recordar que en el sistema francés no se informa a los alcaldes de las operaciones de mantenimiento del orden que la policía nacional hace en su municipio, ni siquiera de las operaciones importantes, a no ser que lo averigüen a través de sus propias redes de información extraoficiales. Uno de sus deseos, recibir más información, acaba de ser aprobado (2001). En las

CCPD, la participación de la policía es a menudo marginal y se limita al comentario de las estadísticas sobre la delincuencia. A mediados de los noventa, esto cambió, ya que los métodos preventivos muestran sus límites en materia de seguridad y de tratamiento de la delincuencia juvenil; porque, para responder a sus conciudadanos, los alcaldes se han de dotar de herramientas y porque se pide a la policía y a la justicia que sean más duras.

6.1 Los nuevos enfoques policiales en las políticas urbanas

El contexto específico francés permite comprender por qué la policía nacional francesa parece incapaz de calmar las inquietudes de la opinión pública (Lévy, 1999). Tanto el sistema de la policía como el de la Gendarmería francesa están centralizados y son múltiples. Están formados por diferentes fuerzas, cada una centralizada y compitiendo la una contra la otra. Casi doscientos treinta mil policías y gendarmes están bajo la autoridad del poder ejecutivo. Después del Estado español e Italia, Francia es el país europeo que tiene la ratio de policías por habitante más alta.⁹ La policía nacional está dividida en varias secciones: seguridad pública, policía judicial, servicios secretos, contraespionaje y extranjería. Comparten tres grandes funciones: el orden público, la lucha contra el crimen organizado y la policía de proximidad.

La acentuación del vínculo entre el tratamiento de la cuestión social y la territorialización de las herramientas, después de 1980, puede parecer un reto a las dos primeras funciones de la policía. ¿Cómo se puede desarrollar la tercera, la de la seguridad pública, si no es con una adaptación del trabajo de los policías a los contextos locales y a las necesidades específicas de las poblaciones? Los ciudadanos reclaman una policía de proximidad, visible, que escuche a las víctimas, como existe en otros países europeos. Ahora bien, la cultura policial y los beneficios alcanzados se oponen a estos cambios, susceptibles de *balcanizar* la policía.

6.2 La policía de proximidad

A mediados de los años ochenta, se llevan a cabo algunos intentos de aproximar la policía a los ciudadanos, siguiendo las propuestas de la comisión Bonne-maison relativas a los barrios. Incluso se implica a los policías en los dispositivos de animación locales, los comités de acción juventud (CAJ); algunas experiencias perduran aún hoy en las afueras de Estrasburgo. Pero el ámbito del barrio siempre

9. No examinaremos aquí el funcionamiento de la Gendarmería, salvo para decir que su imagen es positiva. La Gendarmería depende del Ministerio de Defensa. Es el cuerpo de policía más antiguo y ha inspirado a numerosos cuerpos de policía europeos. Está formado por noventa mil efectivos, que operan en zonas rurales y semirurales. Gracias a unos excelentes métodos de investigación y a su profesionalidad, en 1998 se llegó a resolver el 66 % de los casos. J.P. Brodeur compara el gendarme con el sheriff (1990, 203 y sq.) en términos de legitimidad, proximidad y sentido de la responsabilidad. Pero el despliegue actual de la Gendarmería en las zonas de la periferia urbana pone en duda su eficacia.

ha estado atenuado entre una cultura policial, que le es mayoritariamente hostil —duda de su eficacia— y una organización que la convierte en una policía residual. Después de cada acontecimiento (manifestaciones, disturbios, movimientos sociales...), la jerarquía culpa a los efectivos de los barrios. Por tanto, la práctica no se corresponde con el discurso (Monjardet, 1996, 240 y *sq.*).

La creación de una verdadera policía de proximidad en las zonas urbanas *sensibles*, especialmente en los suburbios, se convierte en una prioridad en materia de seguridad del gobierno encabezado por Lionel Jospin desde la vuelta al poder de la izquierda en 1998. El primer ministro de Interior de este gobierno —antes de su dimisión en septiembre de 2000—, J.P. Chevènement, es un portavoz tenaz que multiplica «las “misas cantadas” republicanas» para movilizar el aparato policial. Después de echar un vistazo al modelo de policía comunitaria del norte de Europa, se retiene su uso semántico de la policía de proximidad, «lo cual supone más un esfuerzo de adaptación organizativo de la policía pública hacia los ciudadanos que un esfuerzo organizado por los poderes públicos de cooperación de los ciudadanos en el mantenimiento de “su” policía» (Ocqueteau, 2000, 171).¹⁰

Ahora bien, excepto los jóvenes policías contratados,¹¹ la oposición continúa. ¿Por qué? Según D. Monjardet, poner en funcionamiento una policía de proximidad implica grandes cambios en el reclutamiento y la formación inicial y continua de los policías, en las modalidades de destinación, movilidad y gestión de las carreras, en la aplicación de las herramientas de evaluación y de control, en las prácticas, en la cultura profesional, en las relaciones con el usuario (1999, 525). Muchos policías acusan a esta «nueva» policía de angelismo o de laxismo, por oposición a las demandas de dureza para restablecer la tranquilidad. Un gran número de policías consideran aún que ser policía de proximidad no es una *verdadera* «función policial, que ellos no han entrado en la policía para jugar a hacer de guardianes o de canguro»; por otra parte, además, este trabajo se deja preferentemente a los jóvenes alumnos o a los solitarios. Frente al modelo británico, que ennoblece la policía de calle, la policía francesa margina la seguridad pública.¹² Incluso cuando tiene voluntad de hacerlo, como parece que es el caso en 1999, el Estado tiene muchas dificultades a la hora de introducir reformas en la corporación policial, que rechaza admitir al ciudadano entre ella y el Estado. Para el sindicato de comisarios y altos funcionarios de la policía nacional, la descentralización requiere *más Estado* para evitar los feudos y *las visiones estrechas de los alcaldes* (citado por Lévy, 1999, 77). por tanto, como subraya Ocqueteau (2000),

10. *Cahiers de la sécurité intérieure*, revista publicada por La Documentation Française, dedica un dossier a «Les dilemmes de la proximité», compilación de experiencias extranjeras en Europa, núm. 39, 2000.

11. A menudo, la policía de proximidad supone en la práctica la incorporación de adjuntos de seguridad (ADS), formados en un mes, reclutados por cinco años y remunerados con el salario mínimo, al lado de algunos jóvenes agentes que acaban de salir de una escuela de policía, para reforzar la policía de barrio destinadas a un distrito determinado. Con frecuencia se nombra un lugarteniente de policía para asegurar el trabajo de comunicación entre los participantes.

12. En Francia se esbozan algunos gestos simbólicos a partir de 1989; por ejemplo, la creación de una Subdirección de Prevención y Acción Social en la Dirección General de Seguridad Urbana, pero su influencia es irrisoria.

«el ejercicio del mando será largo y difícil, pero, en esta materia, hay que saber dar tiempo al tiempo».¹³

En Francia, la policía rara vez obtiene su legitimidad de la satisfacción de los ciudadanos en un territorio determinado —como pasa en el Reino Unido, en los Países Bajos o, incluso, en Alemania (Body-Gendrot, 1998)— sino que la espera de su jerarquía. De ello resulta una ignorancia y un rechazo recíproco entre la policía y los ciudadanos, en particular en las zonas de riesgo. Los jóvenes policías trasladados a los suburbios casi nunca viven allí (a diferencia de los gendarmes) y vuelven a casa, en la provincia, cuando no están de servicio, es decir, una parte de la semana. También tienen tendencia a pedir rápidamente el traslado para trabajar cerca de su zona de origen y a menudo se quedan a disgusto en la región de París o en las CRS (Compañías Republicanas de Seguridad), forzados y descontentos. Por supuesto, hay excepciones: un inventario de buenas prácticas muestra que los policías bien establecidos durante varios años mantienen unas relaciones duraderas y gratas con la población urbana, incluidos los jóvenes.

6.3 Medidas de urgencia

Como respuesta a las denuncias de los alcaldes de ciertos barrios, el Ministerio de Interior introduce varios cambios a principios de los años noventa:¹⁴ contrata más gente y aumenta los recursos de la policía, reforma las estructuras y las estrategias.

Desde 1981, el ministro Gaston Deferre (también alcalde de Marsella) contrata diez mil policías y mejora su formación. De 1986 a 1990, su sucesor, Pierre Joxe, aumenta el presupuesto de la policía en cinco mil millones de francos, para mejorar sus infraestructuras. Entre 1994 y 1995, el nuevo ministro, Charles Pasqua, contrata cinco mil policías y destina siete mil millones de francos a la modernización de las estructuras policiales. A finales de 1991, miles de jóvenes cumplen el servicio militar en la policía como *Service National Ville* («servicio nacional urbano»; los legisladores ponen fin al servicio militar en 2001). Se transfiere un cierto número de labores restringidas a los policías a otros servicios, que dependen con frecuencia de los municipios (objetos perdidos, documentos de identidad, etc.). Pero, al mismo tiempo, se revisa a la baja el número de horas de trabajo efectivo (para un policía en activo, hay que contabilizar siete horas al día, teniendo en cuenta las bajas por enfermedad, las vacaciones, la formación, etc.).

Las leyes Debré de 1995 confirman el enfoque monopolizado de la represión, confiada sólo a la policía. Varios actos de terrorismo permiten que el ministro de Interior de la época, J.L. Debré, acentúe la vigilancia del espacio público con el programa Vigipirate, con la presencia de las fuerzas de intervención CRS y de los militares junto a los gendarmes y la policía urbana. Paralelamente, el ministro de

13. Para una exposición detallada de la doctrina oficial de la reforma francesa, cf. Ministerio de Interior, *Guide pratique de la police de proximité*, París, IHESI, La Documentation Française, 2000. F. Ocque-teau destaca bien los objetivos de esta reforma y afirma que deberán pasar al menos unos diez años para medir sus resultados (2000, 173-183).

14. *Vid.* Monjardet (1996), pág. 240 y sq.

Justicia, Jacques Toubon (1993-1997), crea las Unidades de Encuadre y Educación Reforzada (UEER), que se encargan de los delincuentes reincidentes. Cuestionados en su momento por los militantes de izquierdas, estos dispositivos perduran y ningún gobierno se atreve a suprimirlos por miedo a las críticas; incluso se refuerzan varias veces en 2001, especialmente después de los atentados terroristas en los Estados Unidos.

El gobierno de izquierdas endurece el tono a finales de los años noventa, bajo la presión de los alcaldes y los funcionarios territoriales, de las cifras de la delincuencia, de las consideraciones electorales y de los cambios europeos. La cuestión de la suspensión de los subsidios a las familias de delincuentes se deja a criterio de las cajas de subsidios familiares. El Ministerio de Justicia encarga a los fiscales que sancionen con más severidad las agresiones de jóvenes contra agentes del Estado, en virtud de una reinterpretación de la ordenanza de 1945. Al mismo tiempo, el enfoque francés tiene la singularidad de resistir bastante bien el populismo punitivo y las derivas *seguritarias*. En 1997, por ejemplo, el consejo de Estado prohíbe a los alcaldes que dicten ordenanzas a favor de los toques de queda o los decretos contra la mendicidad agresiva, sin precisar su duración (limitada) ni el espacio afectado. Sin embargo, los alcaldes obtienen en 2001 la autorización para establecer toques de queda en los barrios «sensibles», a su parecer (Orléans y Colombes, en la región de París, Cannes, Étampes y Niza, esto es, en los municipios que hacen campaña en las últimas elecciones municipales sobre el tema de la inseguridad). Se prohíbe que los menores de trece años estén en la calle, no acompañados, entre las once de la noche y las seis de la mañana, en los barrios designados estadísticamente como barrios de riesgo. Por otra parte, se critica la creación de un archivo nacional para facilitar el trabajo policial, la Comisión Nacional de Informática y Libertad vela por las libertades públicas.

En este punto, es preciso mencionar el papel de los servicios secretos en la construcción de las *violencias urbanas*. Para un cierto número de investigadores, las nociones de inseguridad y de violencia urbana son, de hecho, construcciones sociopolíticas, sin relación con la realidad del entorno. El término violencia urbana, por ejemplo, lo inventa el departamento de los servicios secretos, deseoso de seguir en activo después del declive de la amenaza de la izquierda, durante los años setenta, y después del escándalo del caso Doucé. Expertos de la policía política y del antiterrorismo desarrollan un *márketing* inteligente en el Ministerio de Interior y convencen de la existencia de un *enemigo* difícil de definir, procedente de territorios susceptibles de cambios violentos y terroristas (Bonelli, 1999). La capacidad de comunicación de la sección Ciudades y Suburbios de los servicios secretos hacia los medios de comunicación (los otros servicios son reservados) permite que el Ministerio de Interior dé la impresión de no estar inactivo y de vigilar día a día el aumento de las *violencias urbanas* en unos quinientos territorios, después en más de un millar (sobre casi unos cien mil). ¿Significa esta interpretación que el sentimiento de inseguridad que produce la llamada *violencia urbana* es puramente imaginario? ¿La han situado deliberadamente en el centro del debate público aquellos que, en el seno de las instituciones, tienen interés en convertir en un problema tanto los riesgos como a los autores de los disturbios y a sus vícti-

mas, para dar cuenta de los conflictos o, incluso, dirigirlos? Esto es más fácil cuanto más impreciso es aquello que provoca inquietud.¹⁵

De cualquier forma, el término *violencia urbana* está lejos de expresar la diversidad de las tensiones que han ido alejando a los jóvenes de las instituciones encargadas de la prevención. En los barrios pobres, las relaciones entre jóvenes, vecinos y policía se siguen degradando a lo largo de los años noventa. En algunos barrios, cada intervención policial, con frecuencia a petición de un habitante, provoca una movilización colectiva contra la policía.

El caso Riad en Lille-sur o los dilemas de la policía de proximidad

El 24 de marzo de 2000, un agente de policía es atacado violentamente por una decena de jóvenes cuando intenta interpellar, con otros dos compañeros, a cuatro menores que se suben por turnos a un ciclomotor robado.

El 15 de abril, cuando los policías aún tienen presente el rostro completamente entumecido de su compañero, cuya foto aparece en primera página en la prensa local, un vecino avisa a la policía y explica que hay dos individuos alborotando en un coche. La escena pasa en una zona de aparcamiento de un conjunto de viviendas colectivas. Dos hombres de la brigada canina acuden allí. No dejan ir a los perros, poco útiles para hacer salir a los dos individuos del coche. Aunque el primer agente llega a hacer salir sin demasiadas dificultades a Farid, de 27 años, que estaba sentado al volante, el segundo —con un arma en la mano— mata a Riad, de 24 años, un joven argelino que los servicios de policía no conocían. El policía se había sentido amenazado. En los coches encuentra una botella de whisky medio vacía: los dos jóvenes celebraban, al parecer, la contratación de Riad como joven vigilante de la comunidad urbana.

Este dramático suceso provoca una explosión de violencia e incendios en el barrio, entre ellos los de doce pequeñas empresas instaladas por el ayuntamiento, con grandes dificultades, en la zona franca. Esta muestra de agresividad policial es sintomática de las dificultades que tiene la policía para cambiar sus prácticas, ya que el barrio en cuestión, en Lille-sur, es un enclave piloto de la policía de proximidad. Hacía poco tiempo que el ministro de Interior había visitado el barrio para alabar los méritos de la policía de proximidad.

Las grandes dificultades constatadas en las relaciones de los jóvenes de los suburbios, especialmente los procedentes de la inmigración, con las instituciones, en particular la policía, colocan en primera línea las cuestiones étnicas en un país donde perdura la primacía del modelo universalista —todos somos hijos de la República, sean cuales sean nuestros orígenes—; desde este lado del canal de la

15. La revista *Déviance et Société* ya ha tratado estas cuestiones en un número especial titulado «Les desordres urbains: regards sociologiques» (número 24/2000). Vid. especialmente el artículo de Mucchielli (2000, 351-376).

Mancha y del Atlántico, todos los partidos consideran que el modelo angloamericano de *comunidades étnicas* no tiene ningún valor.

7. LAS DISCRIMINACIONES EN LA SOCIEDAD FRANCESA: LOS PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD

Hasta finales de los años ochenta, la sociedad francesa está bastante convencida de que su modelo de integración de las poblaciones inmigrantes es el mejor del mundo, debido a su ambición universal. Lo que aquí llamamos el ideal republicano —la integración individual en el marco de una política de igualdad de oportunidades— consigue integrar bastante bien a los niños que provienen de las diferentes oleadas migratorias. Así, Dominique Schnapper, en un estudio comparativo de las políticas europeas, precisa que «Francia es el Estado nación por excelencia y, por consiguiente, la nación de la integración individual... El sistema escolar centralizado y autoritario educa e integra, durante más de un siglo, a todos los niños, incluidos los hijos de padres que han inmigrado a Francia recientemente... Este modelo, aunque entorpecido por los modos de integración específica de las sociedades modernas, continúa garantizando la socialización de los hijos de inmigrantes» (1992, 114-116).

Desde principios de los noventa, el aumento de la violencia urbana, las persecuciones entre jóvenes de los suburbios y la policía, así como los disturbios que sacuden *los suburbios* al mínimo incidente, deberían haber llamado la atención de los investigadores. Sus preocupaciones les llevan a interesarse por las formas de movilización de los jóvenes, a investigar si hay un movimiento social latente¹⁶ en el aumento de las movilizaciones antirracistas, cegados como están por encontrar un relevo del movimiento obrero.

Probablemente, a causa del discurso contra la inmigración del Frente Nacional, los investigadores en ciencias sociales, sobre todo, se esfuerzan por mostrar que el proceso de integración continúa.¹⁷ De hecho, a grandes líneas, se puede considerar que el proceso de integración de los niños inmigrantes continúa, y que su grado de escolaridad no es diferente, en general, del de los otros niños, a no ser que se examinen las cosas desde una posición social idéntica (Vallet, 1996). Según L.A. Vallet, las familias inmigrantes perciben el sistema educativo como una vía importante de movilidad social, y nuestros datos¹⁸ no contradicen estos análisis. En el caso de Lille-sur, el 21 % de los hombres, entre los veinte y los treinta y cinco años, de origen magrebí, tienen un título de enseñanza superior, en comparación con el 17 % de los otros jóvenes. Es cierto que la situación es menos favorable para las chicas de origen magrebí: el 13 %, es decir, menos que sus herma-

16. Es, por ejemplo, la preocupación de F. Dubet (1987).

17. Pensamos, en particular, en los numerosos escritos de M. Tribalat, P. Weil y P.A. Taguieff.

18. Nos referimos a los resultados de la encuesta «condiciones de vida», llevada a cabo por el INSEE en diez de los barrios incluidos en las políticas urbanas, en 1994-1995; cf. Duprez, Leclerc-Olive, Pinet, 1996 y «Vivre dans les quartiers «sensibles»», *Profils*. INSEE, Lille, agosto de 1996, núm. 41.

nos, pero igual que otras mujeres (18 %). Habría que verificar que los índices de acceso y de éxito no oculten fenómenos de relegación específica a profesiones poco valoradas, lo cual no es improbable, pero en la actualidad ninguna encuesta responde estadísticamente a esta pregunta. En la investigación de Lille, sin embargo, destaca que los jóvenes procedentes de la inmigración magrebí tienen muchas más dificultades que los otros para encontrar un trabajo estable. Así, en el barrio de Lille-sur, formado por una población con mucha precariedad que vive sobre todo en grandes bloques de viviendas, sólo el 10 % de los poseedores de un título superior al bachillerato no magrebíes están en paro, en comparación con el 59 % de los jóvenes de origen magrebí.

Sin embargo, el modelo de integración parece estar hoy en crisis, en el sentido de que los hijos y a veces los nietos de inmigrantes tienen dificultades específicas para acceder a un trabajo estable, aunque la constatación es más válida en ciertas regiones que en otras. Así, las diferencias no son significativas en los barrios del norte de Marsella. No obstante, parece que, sin caer en un discurso catastrofista sobre las discriminaciones de la contratación, debemos estar atentos a la experiencia específica de los jóvenes procedentes de la inmigración en ciertos barrios, que se enfrentan a una paradoja: el recurso a la escuela y al título profundiza las diferencias según el origen, y la falta de titulación acentúa la desafiación económica. Parece que las dos dimensiones de la integración, la económica y la cultural, se excluyen mutuamente.

En los informes, esta constatación de las discriminaciones que se producen en la sociedad francesa plantea una triple interrogación:

- Si el mundo de las empresas tiene responsabilidad en las prácticas de discriminación relacionada con los orígenes (culturales, territoriales, étnicos), ¿no tienen también una parte de responsabilidad los poderes públicos?
- Si las tensiones entre los jóvenes de las ciudades y las fuerzas de la policía son cada vez más frecuentes, ¿no están en parte relacionadas con la composición de los servicios de policía?¹⁹ Además, ¿no contribuye el hecho de que los servicios de seguridad privada recurran preferentemente a inmigrantes, como una especie de efecto perverso, a dejar en manos de las etnias diferentes sectores de la seguridad?
- Finalmente, ¿se debe la escasa presencia de jóvenes inmigrantes en los servicios de policía a la problemática de los suburbios (por una especie de aversión a la policía) o a mecanismos ocultos, relacionados con el proceso de contratación?

Una investigación reciente permite, si no dar una respuesta a estas cuestiones, sí al menos a aclararlas en parte (Duprez, Pinet, 2001).

19. Durante los encuentros nacionales de actores de la prevención de la delincuencia, a iniciativa del ministro de la Ciudad, el 17 y el 18 de marzo de 1999 en Montpellier, J.R. Chevènement, ministro de Interior, dice que su ministerio dará ejemplo y contratará una policía a imagen de los habitantes de los barrios.

Cabe la posibilidad de que se consolide una fractura en la composición de los servicios de seguridad, según dependan del Estado —policía nacional, Gendarmería, aduanas—, de los municipios —policías locales, agentes de mediación social (ALMS)—,²⁰ o de la iniciativa privada —guardias o agentes de seguridad, vigilantes de los centros comerciales y de los locales nocturnos. Es necesario interesarse por la composición de los cuerpos, los métodos y las modalidades de contratación y formación para aclarar quién administra la seguridad interior.

Pero, antes de hablar de discriminación, hay que asegurarse de que las poblaciones poco o nada representadas en la policía sean, efectivamente, candidatas a formar parte de ella, puede haber una especie de síndrome del Tío Tom, mencionado en el Reino Unido en un informe de la Cámara de los Comunes, en 1972 (citado por Holdaway, 1991). Este informe evocaba la desconfianza de los inmigrantes hacia los servicios de policía. A pesar de la voluntad de mejorar la presencia de las minorías en los servicios de policía, el informe Scarman, de 1981, y más tarde el informe McPherson, de 1999, mostraban que sólo el 0,3 % de las fuerzas de policía, en 1981, y apenas el 2 % en 1999, procedían de las minorías étnicas. Después de este informe, se adoptaron diferentes medidas, como las acciones de sensibilización hacia las minorías para que algunos de sus miembros entren en la policía, con la esperanza de lograr una promoción social. El ejemplo inglés merece una atención particular,²¹ ya que subraya las dificultades de transformar una institución en la que algunos especialistas estiman que el racismo es un elemento del proceso de socialización profesional. En Francia, la desconfianza de los cadetes de policía hacia los inmigrantes es más fuerte cuando acaban su formación que antes de entrar en la escuela (Monjardet, 1994).

Algunos autores indican que la situación francesa está marcada por la ideología del orden público de la policía, que prevalece sobre los servicios que se dan a los usuarios. Ahora, como subrayan R. Lévy y R. Zauberman: «el reto de aproximar la policía y la población sólo tiene sentido en una concepción en que la policía no esté sólo al servicio del Estado, sino que sea también responsable de una prestación hacia el público, prestación que sólo puede cumplir con la cooperación de este último. En una concepción donde prevalece el mantenimiento del orden, esta proximidad es una desventaja» (Zauberman, Lévy, 1998).

En relación con las profesiones del ámbito de la seguridad, la atención del sociólogo sólo puede centrarse en la policía nacional, ya que se trata más bien de adaptar la etnicidad a través de una oposición público-privado. Nos parece útil hablar de los servicios de seguridad privada, o al menos de aquellos que están en contacto con los jóvenes procedentes de los suburbios: centros comerciales, agentes de vigilancia en los edificios de protección oficial de alquiler, etc. Al margen de una aprehensión intuitiva, sólo tenemos unos cuantos elementos sobre el hecho de que la seguridad privada recurre de manera preferente a la contratación

20. Las AMLS son, como las ADS de la policía nacional, puestos para jóvenes financiados por el Estado, con una duración de cinco años.

21. Sobre este punto, cf. D. Cassan (en Duprez, Pinet, 2001), que ya ha llevado a cabo dos investigaciones sobre la formación de los policías en la Gran Bretaña, y S. Body-Gendrot, 2001.

de inmigrantes. ¿Tal vez «la contratación de personal de las minorías visibles se inscribe en una estrategia fomentada por las autoridades públicas» (Zauberman, Lévy, 1998)? Según D. Duprez, a partir de una encuesta sobre los agentes de seguridad en los edificios del OPAC de Lille, lo que dirige estas contrataciones es más bien el criterio de la eficacia,²² lo cual tiene consecuencias en la imagen social. Hay que seguir esta pista, porque podría engendrar efectos nocivos, tanto en lo que se refiere a las minorías culturales como en cuanto a los habitantes de estos barrios o, simplemente, hacia los usuarios de los centros comerciales.

La cuestión de las discriminaciones no se puede reducir sólo a dimensiones étnicas. A mediados de los años ochenta, el origen geográfico de los agentes de policía de la comisaría central de Roubaix —la mayoría de los cuales procedían o residían en la zona industrial— contribuye en gran medida a su dificultad de integración en el entorno, hasta el punto de que a veces se ven como una fuerza de ocupación, cuyo única finalidad es el mantenimiento del orden (Duprez, Dupé, Lamarche, Hess, 1986; Duprez-Lamarche, 1990). El tema de los adjuntos de seguridad (ADS), los empleos para jóvenes de la policía, tiene aquí un significado interesante. Para una mejor adecuación entre contratación y puesto de trabajo, a través de un análisis comparativo de situaciones locales, se pueden probar las posibilidades que hay de superar la barrera invisible, según la expresión de Noiriel (1988), que marca la relación de la policía con ciertas categorías de población de la sociedad francesa contemporánea.

Para los candidatos a un puesto de ADS que superan la prueba de los tests, el paso ante la comisión se reduce con frecuencia a una *audición* —la prueba de *fotolenguaje* prevista para los textos (comentario escrito de una situación fotografiada) es poco utilizada por los tribunales. Esta audición está muy determinada por lo que supone *de facto* para los jefes de servicio que participan en ella: una ocasión para *aprovecharse*, aunque tienen derecho a un reclutamiento. Sin duda, más que en el caso de la prueba oral de los agentes de policía, los candidatos inmigrantes —así como los de los barrios *marginales*— se ven acorralados. Aquí, la contratación parece que obedece más a un método de acciones puntuales: hay unos puestos que se deben cubrir, y se elimina a los que no están dentro de las normas de la institución o que no responden a las necesidades de los servicios presentes y que tendrán el deber de administrarlos. Una última dimensión añade sus efectos a los que acabamos de apuntar: la prueba de méritos. Aunque en Marsella casi no es eliminatoria, en Lille supone eliminar de las pruebas más de uno de cada nueve candidatos, y, más aún, casi más de uno de cada cinco jóvenes de origen magrebí.²³

22. Este método de eficacia está presente en las entrevistas de F. Ocqueteau a los directores de supermercados: «Yo, por supuesto, desearía una mezcla étnica en el equipo de seguridad, ya que, cuando la proporción de magrebíes es demasiado alta, puede patinar... Pero hoy que las tensiones todavía son fuertes, un magrebí dialoga más fácilmente con otro magrebí. Encuentra que se le escucha más que cuando se trata de un francés de pura cepa...», entrevista citada por F. Ocqueteau, 1993, 247.

23. La investigación sobre la que trata esta constatación proviene de una comparación de las dos zonas de contratación principales de los ADS: Norte (Lille) y Bouches-du-Rhône (Marsella), cf. Duprez, Pinet (2001).

Sin embargo, para tener en cuenta los efectos de la estructura en este éxito desigual, la comparación entre el perfil de las poblaciones candidatas y las posibilidades de contratación pasa, a continuación, por el tamiz de una serie de enfoques *logolineales*, destinados a ajustar estas oportunidades para que sean *todas iguales, por otra parte*. Estas comparaciones de modelos muestran una diferencia significativa entre Lille y Marsella en cuanto a los agentes de policía. En efecto, en Lille el nivel de titulación es decisivo para explicar este éxito (el sexo y el origen tienen un efecto intrínseco mucho más débil), mientras que en Marsella el título sólo es un elemento minoritario de la explicación, y el sexo y el origen condicionan mucho las posibilidades de éxito. En cuanto a los ADS, aplicado solamente en el caso de Marsella, el mismo tipo de análisis demuestra que el sexo y el origen, y más aún la relación entre ambos, tienen un papel intrínseco importante —lo cual se puede resumir diciendo que el origen magrebí ejerce un efecto negativo sobre el éxito en el caso de los hombres, y el efecto inverso en el caso de las mujeres.

8. ¿TIENEN FUTURO EN FRANCIA LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN?

En un país que tiene el servicio público más importante de Europa y una sociedad formada durante mucho tiempo por un Estado jacobino y por un aparato administrativo centralizado, es difícil escapar de los discursos de las instituciones sobre los problemas de inseguridad de los barrios «sensibles» y de sus estrategias de comunicación hacia los medios de comunicación, los políticos y los investigadores. Las instituciones se enfrentan por sectores de mercado, llevan a cabo estrategias enfrentadas e intentan seguir haciendo lo que saben hacer en un espacio nuevo, que ya no es el Estado, sino la ciudad, con todos sus componentes. Sus objetivos son los grupos sociales minoritarios —no se puede eludir el carácter étnico de la cuestión y de su gestión—, que se consideran adversarios de la paz social y peligrosos para la tranquilidad de ciudades gobernadas por principios democráticos. ¿Sólo puede definirse la regulación local en Francia por unos funcionarios y unos políticos que chocan con otros funcionarios y otros políticos? ¿Qué posición deben tener los investigadores, en cuanto a las prácticas discursivas institucionales?

En el Coloquio de Villepinte, *Des villes sûres pour des citoyens libres*, en octubre de 1997, los dirigentes gubernamentales recordaron solemnemente el derecho de todos a la seguridad. El Ministerio de Interior interpreta la seguridad como un concepto de izquierda y lanza unos contratos de seguridad dirigidos a los alcaldes, los prefectos, los procuradores y otros actores locales, encargados de preparar un inventario de los problemas de su localidad. ¿Restablecerán los centenares de contratos locales de seguridad el sentimiento de seguridad en las ciudades que los firman? Es demasiado pronto para juzgarlo. De hecho, desafían la imposición de normas uniformes sobre el conjunto del territorio y se adaptan a los contextos de delincuencia local que describen los contratos. Aportan flexibilidad: no se hará la misma policía en Marsella y en Lyon, en Neuilly y en Vaulx-en-Velin. Además, al renunciar a su monopolio de represión, que había llegado a ser incontrolla-

ble en los barrios marginales, la policía diluye su responsabilidad ante sus colaboradores. Los contratos admiten diferencias en la manera de actuar, según los municipios y las prioridades que tengan. Devuelven la palabra y la capacidad de iniciativa a los alcaldes. El ámbito local se incluye de forma mixta en una colaboración con el ámbito nacional y el regional. La reinserción del ciudadano, a través de las sedes de justicia, la llamada a las familias para que dialoguen con la escuela, el retorno de los consejos municipales de prevención son otras medidas que simbolizan una nueva gestión territorializada.

Desde este momento, se inician unos métodos de interacción entre instituciones delegadas que deben establecer una relación contractual y una cooperación no conflictiva con un entorno social cada vez más exigente. Los alcaldes buscan medios —policías municipales, vigilantes de noche, mediadores, agentes de seguridad, subcontratados de la seguridad privada, vecinos que se impliquen..., adultos referentes— para compensar las carencias del Estado en la seguridad. ¿Cómo se determina entonces en estos dispositivos la coherencia de los medios y el vínculo con las instituciones nacionales e internacionales? (Body-Gendrot, 2001).

La complejidad administrativa conduce a una disolución de informaciones. Alejados del terreno, algunos funcionarios pierden de vista sus objetivos. Parece que las iniciativas no tienen continuidad. De momento, no tenemos herramientas conceptuales para explicar las evoluciones actuales. Aunque algunos elogian la inserción del ciudadano en el diálogo contractual institucional —cosa que intentan hacer algunos de los últimos CLS que se han firmado—, otros denuncian el pragmatismo de una política simbólica destinada esencialmente al electorado de la clase media. ¿Pueden ser eficaces las instituciones? ¿Cómo se puede saber, si casi no se evalúan? Además, no se trata de actuar sólo sobre los riesgos que presentan una minoría de jóvenes muy molestos, de quienes nadie parece querer ocuparse, sino también sobre aquello que hace que los habitantes de estos barrios tengan el sentimiento de que no disfrutan, ni ellos ni sus hijos, de las mismas oportunidades que los demás y sobre el malestar de los agentes del Estado que trabajan en este ámbito.

Los métodos corporativos —ya se trate de las reticencias de la policía nacional hacia la territorialización,²⁴ de su transformación en policía de proximidad, de su mejor repartición geográfica, de la cultura jerárquica de la función pública, inadaptada e inoperante en cuanto a las dificultades complejas de los barrios, sin coordinación, ni margen de maniobra, ni acusación de sus formas de actuar (Dray, 1999, 119); de la lentitud en el restablecimiento del mapa judicial, de la crisis de representatividad política de los habitantes de los barrios urbanos, de la subpresencia urbana en comparación con la sobrepresencia rural o del paro juvenil, que castiga más a Francia que a los países vecinos—, estos factores graves perjudi-

24. En 1998 se decidió llevar a cabo un nuevo despliegue de gendarmes y fuerzas policiales; en principio, 96 comisarías de pequeños municipios se iban a cerrar y los gendarmes iban a garantizar el orden, para dejar libres a los policías para las tareas urgentes en las zonas marginales. Sin embargo, incluso en esto, los sindicatos de policía y los jefes de pequeños municipios demostraron su poder de bloqueo y la reforma no se llevó a cabo.

can la necesaria modernización del Estado. Los alcaldes urbanos denuncian sin convicción el poco peso que tienen en las decisiones nacionales que se toman para apagar el fuego (ahora son con frecuencia parlamentarios movidos por otros métodos y otras lealtades). Las elites ministeriales responden que no tienen las herramientas necesarias —presupuestos, tiempo de formación cualificada y adaptada de educadores, de policías o de magistrados— para responder a sus inquietudes. Algunos de los colaboradores relacionan la policía y los transportistas, los arrendatarios, los encargados de servicios de seguridad privada (por ejemplo en los campos de deporte y durante las grandes manifestaciones) con la educación nacional. La privatización de la seguridad es rápida y las tecnologías de vigilancia forman parte de los instrumentos utilizados por los alcaldes.

Sin embargo, no habría que ignorar el fenómeno de concurrencia institucional. El territorio se convierte en un espacio de escenificación judicial de las políticas públicas nacionales. Se promueve el ámbito local para permitir que el Estado consiga sus objetivos, cuando no lo ha podido hacer por las vías centralizadas. A la vista de todos los dispositivos, tanto sociales como de seguridad, no parece que los barrios franceses estén abandonados. Hay que saber si los actores son eficaces más allá de la retórica, en la que destacan. Sobre el terreno, ¿sabrán reemplazar la oferta de seguridad estatal los actores de la política urbana? Mejor formación, otros tipos de contratación, atención, una deontología más exigente y la denuncia del racismo institucional podrían contribuir a reducir las tensiones.

La época actual muestra sus vacilaciones. Los sucesivos gobiernos socialdemócratas han defendido una política de prevención social, sin darle los recursos ni los profesionales bien preparados que necesitaba para equiparar los barrios marginales al resto de la sociedad. No se ha encontrado ninguna manera de convencer a los profesores, los policías, los jueces y los educadores más experimentados para que trabajen juntos. En su conjunto, la sociedad no se ha sentido obligada a invertir en las soluciones a través de apadrinamientos e implicaciones diversas. La representación política de las ciudades es indigente y el punto de vista de los vecinos no cuenta. Quedan las soluciones pragmáticas, que las ciudades adoptan caso a caso, y que varían de un lugar a otro. Mientras que la esfera territorial difiere el contexto nacional del interior, es en el primer ámbito donde se revelan las convergencias internacionales.

En Francia, ¿están las estrategias preventivas condenadas a estar bajo la dominación de los métodos *seguritarios*? El contexto electoral —con dos fechas decisivas en el próximo año (elecciones presidenciales y legislativas en 2002)— puede dejar que se suponga, hasta ese momento. Sin embargo, se espera que este contexto, propicio a la elaboración de proyectos a largo plazo, permita reflexionar sobre el fondo de las soluciones que hay que dar al malestar de los barrios pobres y a las poblaciones excluidas del nuevo crecimiento, aunque sólo pueda ser coyuntural.

Lo que se presenta en los años ochenta como el modelo francés de la prevención de la delincuencia da preferencia demasiado retrospectivamente a la prevención social, en detrimento de las respuestas inmediatas al aumento de la delincuencia urbana. Ciertamente, hay que descubrir una fórmula que encuentre un

punto de equilibrio entre las respuestas a las causas de los comportamientos marginales —a menudo, con efectos a largo plazo— y las que sitúan a las víctimas en el centro de la acción pública. En Francia, no se excluye que los conocimientos acumulados de unas experiencias de campo, acompañados por las políticas urbanas, permitan de nuevo una política pública alternativa al discurso *seguritario*.

BIBLIOGRAFÍA

- ACKERMANN, W.; *et al.* *Imaginaires de l'insécurité*. París: Librairie des Méridiens, 1983.
- ARCHER, D.; GARDNER, R. *Violence and Crime in Cross-National Perspective*. Londres: Yale University Press, 1984.
- AUBUSSON DE CAVARLAY, B. «La réponse pénale à la délinquance des mineurs, Résultats statistiques». En: LAZERGES, C.; BALDUYCK, J.P. *Réponses à la délinquance des mineurs*. París: La Documentation Française, 1998, p. 265-275.
- AUTÈS, M. «L'idéologie du travail social». En: LIÉGOIS, J.P.; *et al.* *Idéologie et pratique du travail social de prévention*. Tolosa: Privat, 1977, p. 221-239.
- BAILLEAU, F.; GORGEON, C. [dir.]. *Prévention et sécurité: vers un nouvel ordre social?* Les éditions de la DIV, 2000.
- BECKER, H. «La prise en compte des phénomènes inhabituels dans l'analyse sociologique: les conseils de Hugues». *Société contemporaines*, 27, 1997, p. 13-28.
- BEHARD, D.; ESTÈBE, Ph. «Le chef de projet et le sous-préfet à la ville: entre norme et projet». *Espaces et Société*, 84-85, 1996, p. 37-53.
- BELORGEY, J.M. *La police au rapport*. París: Presses Universitaires de Nancy (le rapport date de 1981), 1991.
- BERLIOZ, G.; DUBOUCHET, L. *Les CCPD: état des lieux, document polycopié*, 1997.
- BIGO, D. *Se garder face à l'ennemi? La construction par la surveillance de la figure de l'ennemi intérieur: ennemi infiltré, ennemi intime*. Congrès AFSP, Rennes, 28, IX-1 X, 1999.
- BOBY-GENDROT, S. *Redynamiser les quartiers en crise: l'expérience*. París: DIV et Documentation française, 1996.
- BODY-GENDROT, S. *Les villes face à l'insécurité. Des banlieues françaises aux ghettos américains*. París: Bayard, 1998.
- BODY-GENFROT, S. «Ghettos, mythes et réalités». En: DEWITTE, Ph. [dir.]. *Immigration et intégration l'état des savoirs*. París: La Découverte, 1999, p. 279-284.
- BODY-GENDROT, S. *The Social Control of Cities? A Comparative Perspective*. Oxford: Blackwell, 2000.
- BODY-GENDROT, S. *Les Villes. La fin de la violence?* París: Presses de Sciences-Po., 2001.
- BODY-GENDROT, S.; RUDDER DE V. «Les relations inter-ethniques dans la ville: entre fictions et mutation». *Revue européenne des migrations internationales*, juillet 1998, p. 7-24.
- BONAFÉ-SCHMITT, J.P. «La ou les médiations des conflits». *Migrants-Formations*, n° 92 (Violences, conflits et médiations), 1993, p. 114-135.

- BONAFÉ-SCHMITT, J.P.; GÉRARD, C.; PORCHER, P. *Les justices du quotidien. Les modes formels et informels de règlement des petits litiges*. GLYSI/Université, Lyon II, 1986.
- BONNELLI, L. *La surveillance des «violences urbaines», transformations organisationnelles et (re) définitions de la menace en France depuis le début des années 1990*. Congreso AFSP, Rennes, 28, IX-1 X, 1999.
- BONNEMAISON, G. *Face à la délinquance: prévention, répression, solidarité, Commission des maires sur la sécurité*. Rapport au Premier ministre, La Documentation Française, 1982.
- BONNEMAISON, G. *La sécurité en liberté*. Paris: Syros, 1987.
- BONNETTI, M. «Chef de projet de développement». *RC-DSU* (n° spécial acteurs du développement) 15, 1997, p. 7-10.
- BRODEUR, J.P. «La police, mythes et réalités». *Cahier de la sécurité intérieure*, 6 août, octobre 1991, p. 307-331.
- BRUN, J.; RHEIN, C. *La ségrégation dans la ville*. Paris: l'Harmattan, 1994.
- CARDO, P. *Mouvement collectifs et violence*. Paris: Conseil national des villes et du développement urbain, 1991.
- CASTEL, R. *Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*. Paris: Fayard, 1995.
- CÉSARI, J. *Faust-il-avoir peur de l'Islam?* Paris: Presses de Sciences-Po, 1997.
- CHAMBOREDON, J.C.; LEMAIRE, M. «Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement». *Revue française de sociologie*, 1, 9, 1970, p. 3-33.
- CHAMPION, J.B.; MARPSAT, M. «La diversité des quartiers prioritaires: un défi pour la politique de la ville». *Économie et statistique*, 294-295, 1996, p. 47-65.
- CHEVALIER, G. «Volontarisme et rationalité d'État. La politique de la ville». *Revue française de sociologie*, XXXVII-2, 1996, p. 209-235.
- CLAVERIE, E. «L'honneur, une société de déclin au XIX^e siècle». *Annales ESC*, 1979, p. 744-759.
- CNV Conseil National des villes. *Rapport du Conseil National des villes: 1994-1997*, pour Martine Aubry, ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Paris: La Documentation Française, 1997.
- COING, H.; MEUNIER, C. *Insécurité urbaine? Une arme pour le pouvoir*. Paris: Anthropos, 1980.
- COLLOVALD, A. «Violence et délinquance dans la presse». En: BAILLEAU, F.; GORGEON, C. *Vers un nouvel ordre social?* Paris: DIV, 1999, p. 39-53.
- COLLECTIF. *En marge de la ville, au coeur de la société: ces quartiers dont on parle*. Paris: L'aube, 1997.
- COMMISSION DES MAIRES SUR LA SÉCURITÉ. *Face à la délinquance: prévention, solidarité*. Paris: La Documentation Française, 1982.
- CRAWFORD, A. *The Local Governance of Crime: Appeals to Community and Partnership*. Oxford: Clarendon Press, 1997.
- DELARUE, J.M. *La relégation*. Paris: La Documentation Française, 1991.
- DELEBARRE, M. *Le temps des villes*. Paris: Seuil, 1993.
- DONZELOT, J.; ESTÈBE, Ph. *L'État Animateur, essai sur la politique de la ville*. Paris: Esprit, 1994.

- DOMZELOT, J.; ESTÈBE, Ph. «Réévaluer la politique de la ville». En: BALMER, R.; FAURE, A.; MABILEAU, A. [dir.]. *Les nouvelles politiques locales*. Paris: Presses de Sciences-Po., 1999, p. 321-344.
- DOURLENS, C.; VIDAL-NAQUET, P. *L'autorité comme prestation*. Paris: CERPE, 1994.
- DRAY, J. *Rapport parlementaire sur les violences urbaines*. Paris: Éditions n° 1, 1992.
- DRAY, J. *État de violence*. Paris: Éditions n° 1, 1999.
- DUBEDOUT, H. *Ensemble, refaire la ville*. Paris: La Documentation Française, 1983.
- DUBET, F.; DUPÉ, M.; DUPREZ, D.; JAZOULI, A.; LAPEYRONNIE, D.; LEFEBVRE, B.; PITAUD, P.; PORTET, F. *Les opérations «été-jeunes». Analyse longitudinale d'une politique*. Paris: CTNERHI/PUF, 1986.
- DUBET, F. *La galère: jeunes en survie*. Paris: Fayard, 1987.
- DUBOUCHET, L. *Les opérations prévention-été, Aix-en-Provence*. Collège coopératif Provence Alpes Méditerranée, 1990.
- DUBOUCHET, L.; VULBEAU, A. *Des expérimentations sociales et des jeunes*. Matrice Recherche, 1999.
- DUPREZ, D. «L'émergence du "jeune leader" dans les cités populaires et les nouvelles vocations à l'animation». *Problèmes de jeunesse et régulation sociales*. Paris: Publications du CRIV, 1986, p. 259-270.
- DUPREZ, D. *Prévention de la délinquance et protection judiciaire de la jeunesse*. Rapport de recherche pour le Conseil de la recherche du ministère de la Justice. Ronéo: Lille, CLERSÉ, 1987.
- DUPREZ, D. «La réorganisation des politiques de prévention en France. Le cas des dispositifs été-jeunes et des CCPD». En: SAUCIER, J.F.; HOUDE, L. [eds.]. *Préventions psychosociale pour l'enfance et l'adolescence*. Montreal: Les Presses de l'Université de Montréal, 1990, p. 173-184.
- DUPREZ, D. «La dramaturgie de la relégatio. Vie quotidienne et sociabilités dans les cités». *Profils*. Insee Lille, 41, 1996, p. 55-73.
- DUPREZ, D. «Le modèle français de prévention de la délinquance: la recherche d'un second souffle». En: HEBBERECHT, P.; SACK, F. [eds.]. *La prévention de la délinquance en Europe*. Paris: l'Harmattan, 1997, p. 61-82.
- DUPREZ, D.; HEDLI, M. *Le mal des banlieues? Sentiment d'insécurité et crise identitaire*. Paris: l'Harmattan, col. Logiques sociales, 1992.
- DUPREZ, D.; LAMARCHE, C. «Les politiques locales d'ordre de la cité. De l'innovation à la gestion du quotidien». *Les cahiers de la sécurité intérieur*, 2, 1990, p. 61-80.
- DUPREZ, D.; PINET, M. *Policiers et médiateurs. Sur le recutement et les appartenances*. Lille: CLERSÉ-IFRÉSI, 2001.
- DUPREZ, D.; LECLERC-OLIVE, M.; PINER, M. *Vivre ensemble. La diversité des quartiers «sensible» à l'épreuve de la vie quotidienne*. Lille: IFRÉSI, 1996.
- DUPREZ, D.; DUPÉ, M.; LAMARCHE, C.; HESS, R. *La gestion de la délinquance. Représentations de la jeunesse et politiques locales*. Rapport CNRS-CNPD. Lille: CLERSÉ, 1986.
- EISNER, M. «Crime and Economy, Proceeding of the 11th Criminological Colloquium, 1994». *Criminological Research*, XXXII, 1995, p. 13-51.
- ESTÈBE, P. [ed.]. *Diagnostic local de sécurité*. Rapport à 1^a DIV. Paris, 1990.

- EURIAT, M. «Les Zones d'Éducation Prioritaires». En: PUMAIN, D.; GODARD, F. [eds.]. *Données Urbaines*. Paris: Anthropos, 1996, p. 115-122.
- FAGET, J. *Justice et travail social. Le rhizome pénal*. Tolosa: Erès, 1992.
- FAGET, J. *La médiation*. Tolosa: Erès, 1997.
- FIGEAT, D. «Bilan des opérations Habitat et Vie Sociale». *Correspondance Municipale*, 231, octobre 1982.
- GEINDRE, F. *Villes, démocratie, solidarité: Le pari d'une politique, préparation du XI^e plan, commissariat général au plan*. Paris: La Documentación Française, 1993.
- GILLING, D. *Crime Prevention: Theory Policy and Politics*. Londres: UCL Press, 1997.
- GLEIZAL, J.J. *La Police en France*. Paris: «Que sais-je?», 1993.
- GLEIZAL, J.J.; DOMENACH, J.; JOURNES, C. *La police dans les démocraties occidentales*. Paris: PUF, 1993.
- GRÉMY, J.P. *L'insécurité des Français*. Études et Recherches. Paris: IHÉSI, 1997.
- GURR, T.R. «Historical trends a violent crime: Europe and the United States». En: GURR, T.R. [ed.]. *Violence in América: the History of Crime*. California: Newbury Park, 1, 1989, p. 21-54.
- HEBBERECHT, P.; SACK F. [eds.]. *La prévention de la délinquance en Europe*. Paris: l'Harmattan, 1997.
- HOLDAWAY, S. *Recruiting a Multi-racial Police Force: A Research Study*. Londres: Home Office, 1991.
- ION, J. *Le travail social à l'épreuve du territoire*. Paris: Privat, 1991.
- JANKOWSKI, B. *La police de proximité. Regard de la recherche sur un nouveau style de police*. Paris: IHÉSI, 1992.
- KILLIAS, M.; et al. *European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics*. Consejo de Europa, Draft Model Version 9, 1995.
- LAPEYRONNIE, D. «Contre-monde». *Les annales de la recherche urbaine*, 83-84, 1999, p. 53-58.
- LAZERGES, C. [ed.]. *Les publics privilégiés par les contrats d'action de prévention*. Montpellier: ERPC, 1991.
- LE GALES, P.; MAWSON, A. *Management Innovations a Urban Policy Lessons from France*. Londres: Report to the Local Government Management Board, 1994.
- LE GALL, G. «La politique de la ville». *Rapport pour le Conseil Économique et Social de l'Île-de-France*, 1994.
- LÉVY, F. *Bilan des contrats de plan DSQ*. Paris: La Documentation Française, 1988.
- LÉVY, R. «Neighbourhood versus Europe: The dilemma of French policing». En: HOOD, R.; COURAKIS, N.E. [eds.]. *The Changing Face of Crime and Criminal Policy a Europe*. University of Oxford, Centre for Criminological Research, 1999, p. 68-87.
- LINHART, V. «Des Minguettes à Vaux-en-Velin, les réponses des pouvoirs publics aux violence urbaine». *Culture et conflits*, 6, juny 1992.
- MARCUS, M. «Changeons les réponses à la délinquance juvénile». *Le Monde*, 27 janvier, 16, 1998.
- MULBURN, Ph. «Violence et incivilités: de la rhétorique experte à la réalité ordinaire des illégalismes». *Déviante et Société*, 24, 4, 2000, p. 331-350.

- MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. *Des villes sûres pour des citoyens libres*. Actes du colloques de Villeopinte. Paris: SIRP (ministère de l'Intérieur), 1998.
- MONJARDET, D. «La culture professionnelle des policiers». *Revue française de sociologie*, XXXV-3, 1994, p. 393-411.
- MONJARDET, D. *Ce que fait la police, sociologie de la force publique*. Paris: La Découverte, 1996.
- MONJARDET, D. «La police de proximité: ce qu'elle n'est pas». *Revue française d'administration publique*, 91, p. 519-525.
- MUCCHIELLI, L. «L'expertise policière de la "violence urbaine"». *Déviance et Société*, 24, 4, 2000, p. 351-376.
- MUCCHIELLI, L. *Violence et insécurité. Fantômes et réalités dans le débat français*. Paris: La Découverte, 2001.
- MUEL, F. «L'initiative privée, le "terrain" de l'Éducation Spécialisée». *Actes de la recherche en sciences sociales*, 32-33, 1980, p. 15-49.
- MUEL-DREYFUS, F. *Le métier d'éducateur*. Paris: Minuit, 1983.
- NOIRIEL, G. *Le creuset français. Histoire de l'immigration XIX^e-XX^e siècle*. Paris: Seuil, 1988.
- NOVARINA, G. «Du quartier à la ville». *Revue de Géographie de Lyon*, 72-2, 1997, p. 131-140.
- OCCUETEAU, F. «Les centres commerciaux, cibles d'incivilités et promoteurs de sécurité». *Déviance et Société*, XVII-3, 1993, p. 235-260.
- OCCUETEAU, F. «La réforme française au miroir des polices de proximité étrangères». *Les cahiers de la sécurité intérieure*, 39, 2000, p. 173-183.
- PEYRE, V.; TÉTARD, F. «Les enjeux de la prévention spécialisée: 1956-1963». En: BAILLEAU, F.; et al. [eds.]. *Lectures sociologiques du travail social*. Paris: Les Éditions ouvrières, 1985, p.116-132.
- PEYREFITTE, A. [ed.]. *Réponses à la violence*. Paris: Presses-Pocket, 1977.
- ROBERT, Ph. [dir.]. *Les politiques de prévention de la délinquance à l'aune de la recherche*. Paris: l'Harmattan, 1991.
- ROBERT, Ph. «Les territoires du contôler social, quels changements?». *Déviance et Société*, 24,3, 2000, p. 215-236.
- ROBERT, Ph.; ZAUBERMAN, R.; POTTIER, M.L.; LAGRANGE, H. «Mesurer le crime. Entre statistiques de la police et enquêtes de vistimaton (1985-1995)». *Revue française de sociologie*, XL-2, 1999, p. 255-294.
- ROCHÉ, S. *Insécurité et libertés*. Paris: Seuil, 1994.
- ROCHÉ, S. *La société incivile*. Paris: Seuil, 1996.
- ROCHÉ, S. *Sociologie politique de l'insécurité*. Paris: PUF, 1998.
- ROCHÉ, S.; FOUR, P.A.; POISBLAUD, K.; et al. *La loi et l'ordre ou le problème des incivilités*. Paris: Rapport pour la DIV et le ministère de la Justice, 1998.
- ROQUES, M. «Les opposants aux GLTD frappent-ils trop fort?». *Lien Social*, 450, juillet, 7, 1998.
- SCHNAPPER, D. *L'Europe des immigrés*. Paris: Bourin, 1992.
- SCHWARTZ, B. *L'insertion professionnelle des jeunes*. Paris: La Documentation Française, 1982.
- SIMON, P. *Communication*. Conférence Migcities, Lisboa, novembre, 1999.

- SUEUR, J.P. *Demain la ville*. Paris: La Documentation Française, 1998.
- TABARD, N. «Des quartiers pauvres aux banlieues aisées: une représentation sociale de territoire». *Économie et statistique*, 270, 1993, p. 5-22.
- VALLET, L.A. «L'assimilation scolaire des enfants issus de l'immigration et son interprétation: un examen sur les données françaises». *Revue Française de pédagogie*, 117, 1996.
- VAN DUK, J.J.M. «More than a matter of security: Trends a crime prevention in Europe». En: HEIDENSOHN, F.; FARRELL, M. [eds.]. *Crime in Europe*. Londres: Routledge, 1991, p. 27-42.
- VEILLARD-BARON, H. «Le travail social dans les quartiers sensibles: crises et mutations récentes». *Espaces et Société*, 84-5, 1996, p. 177-200.
- VOURC'H, C.; MARCUS, M. *Sécurité et démocratie*. Paris: Forum Européen de la sécurité urbaine, 1994.
- WACQUANT, L. *Les prisons de la misère*. Paris: Raisons d'agir, 1999.
- WYVEKENS, A. *L'insertion locale de la justice pénales. Aux origines de proximité*. Paris: l'Harmattan, 1997.
- ZAUBERMAN, R.; LÉVY, R. «La police française et les minorités visibles: les contradictions de l'idéal républicain». En: CARTUYVELS, Y.; DIGNEFFE, F.; PIRES, A.; ROBERT, Ph. [eds.]. *Politique, police et justice au bord du futur; mélanges pour et avec Lode Van Outrive*. Paris: l'Harmattan, 1998, p. 287-300.
- ZAUBERMAN, R.; ROBERT, Ph. *Du côté des victimes, un autre regard sur la délinquance*. Paris: l'Harmattan, 1995.